



**Inserción civil, lucha
política y delincuencia
en la posguerra:
El Frente Norte 3-80
(FN 3-80) en
Nicaragua***

Verónica Rueda
Estrada

Unidad Académica Playa del Carmen
Universidad de Quintana Roo
vrueda@uqroo.edu.mx

Recibido: febrero 17 de 2015
Aceptado: mayo 25 de 2015

BIBLID [2225-5648 (2015), 5:1, 353-414]

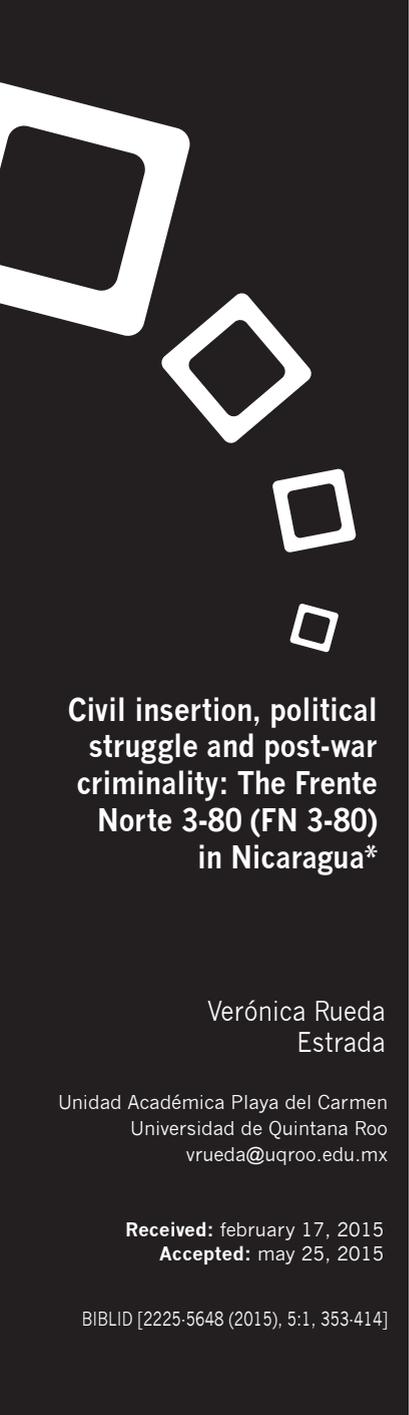
Resumen

El presente artículo expone la manera en que nacieron y desarrollaron sus actividades los grupos armados de Nicaragua durante la posguerra (1990-1997). Se abordan principalmente de manera descriptiva y, a partir de ahí, de forma analítica tomando como caso de estudio al Frente Norte 3-80 (FN 3-80), un importante grupo reontra que tuvo su base de operaciones en Quilalí, Nueva Segovia; así mismo se analizan otros grupos armados escindidos de este. A través del seguimiento periodístico de sus actividades y con base en entrevistas a sus miembros, se caracterizan los desmovilizados que participaron en el grupo: los que se rearmaron como forma de presión negociadora para obtener beneficios para su inserción productiva; los que le dieron un uso político a las organizaciones armadas, incluso por parte de sus propios líderes; y, finalmente, los excombatientes que, al no poder insertarse civilmente, optaron por la delincuencia como forma de vida durante la posguerra. El rearme significó un grave problema social, económico y político para Nicaragua, y tiene sus raíces en las violentas políticas de estabilización implementadas por el Gobierno de Violeta Barrios; sin embargo en el presente artículo se pondera tanto el paso de la vida militar a la civil en condiciones de pobreza, como el surgimiento de grupos delincuenciales al amparo de la ineficiente inserción civil.

Palabras clave

Excombatientes, desmovilización, rearme, delincuencia.

* Estudio original elaborado para la revista "Policía y Seguridad Pública" en el marco de las gestiones de apoyo académicas internacionales realizadas por el Centro de Investigación Científica (CINC-ANSP).



**Civil insertion, political
struggle and post-war
criminality: The Frente
Norte 3-80 (FN 3-80)
in Nicaragua***

Verónica Rueda
Estrada

Unidad Académica Playa del Carmen
Universidad de Quintana Roo
vrueda@uqroo.edu.mx

Received: february 17, 2015

Accepted: may 25, 2015

BIBLID [2225-5648 (2015), 5:1, 353-414]

Abstract:

This article expounds on how Nicaraguan armed groups were born and carried out their activities throughout the post-war era (1990-1997). They are initially addressed in a descriptive fashion, to then proceed into an analytical study that takes an in-depth look at the Frente Norte 3-80 (FN 3-80), an important Recontra group headquartered in Quilalí, Nueva Segovia; as well as other armed groups splintered from Frente Norte which are also later analyzed. The demobilized elements of this group were characterized by closely tracking their activities through existing journalistic material, as well as based on interviews offered by the members themselves: therefore identifying those that decided to rearm as a way of exerting pressure over the ongoing negotiations to ensure more benefits towards their reinsertion back into the workforce; those that used said armed groups as a means towards political ends, even by their own leaders; and finally, the ex-combatants that at being unable to successfully reinsert themselves back into society, opted on making crime their way of life during the post-war. This rearmament presented a serious social, economic and political problem for Nicaragua, and its roots can be found in the violent stabilization policies implemented by the Government of Violeta Barrios; however, this article focuses on the passage from a military life back into a civilian lifestyle immersed in poverty, as well as the emergence of criminal groups under the shadow of an inefficient civil insertion process.

Key words:

Ex-combatants, demobilization, rearmament, criminality.

* Original study written for the "Police and Public Security" Journal within the framework of the international academic support efforts conducted by the Centro de Investigación Científica (CINC-ANSP).

1. Presentación

El presente artículo tiene el propósito de describir la manera en que nacieron y desarrollaron sus actividades los grupos armados de Nicaragua durante la posguerra (1990-1997). Se les estudia tomando como caso al Frente Norte 3-80 (FN 3-80), un importante grupo recontra que tuvo su zona de influencia en Quilalí, Nueva Segovia; asimismo se analizan otros grupos armados escindidos de este. Se hace un seguimiento periodístico de las actividades del FN 3-80 a través de dos diarios de circulación nacional con líneas editoriales antagónicas, La Prensa (LP) y El Nuevo Diario (END), ello con la finalidad de hacer un contraste informativo y minimizar las brechas de parcialidad periodística; también y como parte de la metodología utilizada, se incluyen extractos de entrevistas a exmiembros del FN 3-80 y a excontras.

La gran cantidad de grupos en armas y la amplitud de sus demandas no permiten hacer una generalización sobre el rearme; sin embargo, para los límites de este trabajo se describe y caracteriza a los desmovilizados que participaron en el FN 3-80 por medio de las tres vertientes identificadas entre los participantes en el grupo en armas: 1) los excombatientes que utilizaron el rearme como presión negociadora para obtener beneficios para su inserción productiva; 2) los que le dieron un uso político a la organización, incluidos sus propios líderes; 3) los excombatientes que, al no poder insertarse civilmente, optaron por la delincuencia como forma de vida.

El rearme tiene sus raíces en las violentas políticas de estabilización implementadas por el Gobierno de Violeta Barrios y significó un grave problema social, económico y político; paradójicamente, es un tema poco estudiado desde la academia, por lo que este trabajo de carácter descriptivo pretende cerrar la brecha analítica sobre el periodo de la posguerra. El énfasis está puesto tanto en el tránsito de la vida militar a la civil en condiciones de pobreza, como en el surgimiento de grupos en la Recontra con tintes delincuenciales cuya justificación fue su problemática inserción civil.

Hay que recordar que la posguerra inició en 1990 cuando Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones. La ganadora de la contienda Violeta Barrios obtuvo la victoria por medio de una alianza multipartidaria aglutinada en la Unión Nacional Opositora (UNO); así, la viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro se convirtió en la primera mujer presidente de Nicaragua. Doña Violeta era miembro de la élite nicaragüense, tenía poca experiencia política, pero fue apoyada abiertamente por el Gobierno de Estados Unidos y por el electorado nicaragüense.

La premisa fundacional del Gobierno de Chamorro fue la necesaria desmilitarización del país y, por lo tanto, la desmovilización y/o reestructuración de los tres ejércitos, que consistió en:

- La desmovilización de ejército irregular de la Contra, cuyo nombre oficial fue Resistencia Nicaragüense (RN).
- El retiro de los oficiales del Ejército Popular Sandinista (EPS), es decir la reconfiguración del ejército regular.
- El licenciamiento de los miembros del Ministerio de Interior (MINT), combatientes que, aunque realizaron labores militares durante una década, no fueron reconocidos como parte de las fuerzas armadas.

Se inició, entonces, el proceso de desmovilización de 22,213 contras, entre 1990 y 1993 por lo menos 65,000 exsoldados fueron retirados del EPS y unos 5000 combatientes del Ministerio del Interior (MINT) dejaron la institución. El Gobierno prometió a los excombatientes, sin importar su antecedente militar, una cantidad considerable de beneficios, el más importante fue la entrega de tierras rurales pues se buscó regresarlos al campo como agricultores, ello tomando en cuenta su innegable veta campesina.

La desmovilización de los tres ejércitos implicaba la disponibilidad de cuantiosos recursos económicos para indemnizarlos, así como fondos para ejecutar programas que los apoyaran en su tránsito de la vida militar a la civil. El Gobierno nicaragüense, en su afán por desmilitarizar el país, no consideró el factor presupuestal para cumplir con los compromisos firmados; las expectativas oficiales consistían en la obtención de fondos internacionales como premio por la paz lograda y por la des-sandinización del país, pero, en los hechos, la constante fue la escasez de recursos. Es necesario considerar que su principal aliado, Estados Unidos, se encontraba ocupado en la Invasión de Irak y Nicaragua –sin los sandinistas en el poder– dejó de ser prioridad para su política exterior. La administración chamorrista se caracterizó por la crisis, y las terribles condiciones económicas dejaron a los excombatientes en peores condiciones de las que habían tenido durante la guerra de los años ochenta.

Para lograr mejoras sustanciales en su vida muchos de ellos retomaron las armas, es decir, se rearmaron, surgen así los recontras (excontras en armas), los recompas (exsoldados sandinistas y simpatizantes), los revueltos (excontras y exsandinistas luchando por la tierra) y los rearmados (grupos de excombatientes a los que les fue negado su pasado organizativo al solo considerarlos delincuentes). Existe una gran cantidad de grupos de excombatientes en armas, para el presente trabajo solo se da seguimiento y análisis a los recontras del Frente Norte 3-80.

Los grupos en armas buscaron insertarse de la mejor manera en las condiciones de pobreza características del país. Sin embargo, la abierta necesidad de tierra, el incumplimiento por parte de Violeta Barrios y su Gobierno a la palabra empeñada en los acuerdos de desmovilización, así como la discrecionalidad en el proceso de licenciamiento y retiro, crearon una serie de conflictos legales, sociales, económicos y políticos que atomizó aún más a la sociedad nicaragüense. Debido a la veta agrícola de los excombatientes, la posguerra se volvió una lucha por la propiedad, ello como parte de las añejas guerras campesinas del país.

El norte del país se volvió de nuevo una zona de guerra, independientemente de los intentos gubernamentales de minimizar el problema. Fue tan grave que una agrupación creada en el seno del Ejército, la Brigada Especial de Desarme (BED) logró desmovilizar en la posguerra a una cantidad mayor de hombres que los que habían participado oficialmente en la desmovilización de la Contra en 1990. En este contexto de desmovilizaciones y rearmes, el FN 3-80 es significativo porque fue una agrupación fuerte, mediática y conflictiva. A diferencia de lo que ocurre con otros grupos en armas, la información sobre el FN 3-80 es abundante por lo que se hizo un seguimiento de sus reivindicaciones, sus actividades y, finalmente, su desmovilización, pactada en condiciones ventajosas. Al interior del FN 3-80 las diferencias tuvieron como resultado una serie de escisiones, constituyéndose varios grupos sumamente violentos; muchos de ellos terminaron alejados de las reivindicaciones como gremio de excombatientes y levantaron la bandera de la delincuencia como forma de vida.

Debido a la gran cantidad de grupos en armas, a lo violento de sus acciones, se puede caracterizar a la posguerra en Nicaragua como una nueva guerra. A diferencia de la década de los ochenta, los bandos antagónicos no tenían una ideología definida, en la posguerra se trató de una lucha del Gobierno en contra de los excombatientes, quienes retomaron las armas buscando insertarse de la mejor manera posible a la vida civil.

2. Introducción

Las elecciones en Nicaragua, celebradas en febrero de 1990, permitieron que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) saliera del poder y lo dejara en manos de Violeta Barrios, la viuda del periodista e intelectual Pedro Joaquín Chamorro. La nueva presidenta, miembro de la élite nicaragüense e hija de un terrateniente de Rivas, al momento de ser electa contaba con poca experiencia política, pero fue apoyada por el Gobierno de Estados Unidos y por buena parte del electorado nicaragüense. En el imaginario popular era la única que podía poner fin al conflicto bélico, cuya duración se había prologado por más de 10 años¹.

1 En la lógica del electorado nicaragüense, Estados Unidos no permitiría que el FSLN gobernara,

La sorpresiva derrota electoral del FSLN dio lugar a la necesaria transferencia de poderes, para ello se firmó el Protocolo de Transición que estableció como base fundamental para la gobernabilidad, por un lado, la desmovilización del ejército irregular contrarrevolucionario conocido como la Contra, y, por el otro, el retiro de los oficiales del Ejército Popular Sandinista (EPS) y del Ministerio de Interior (MINT) (INCEP, 1994, p. 563). Violeta Barrios, además, decretó la suspensión del reclutamiento para el servicio militar patriótico (SMP), como parte de un plan fundamentado en una premisa económica básica: una vez acabado el conflicto bélico, se eliminarían los gastos en defensa lo que se traduciría en inversiones, capitales y trabajo.

La desmovilización de los tres ejércitos implicaba la disponibilidad de cuantiosos recursos para indemnizar a todos aquellos que entregaron el arma, por ello era fundamental contar con un sustancial presupuesto para la capacitación de los desmovilizados y, sobre todo, para la creación de puestos de trabajo sin importar su antecedente militar. El Gobierno nicaragüense no consideró estos elementos, por lo que la simplista premisa de la reactivación por la paz fue un error de magnitudes catastróficas. Como ya se mencionó, los fondos norteamericanos no llegaron en la cantidad deseada, las inversiones extranjeras fueron limitadas y la economía del país continuó en ruinas. El Gobierno recurrió al endeudamiento, a la reducción del aparato gubernamental y a la privatización de la telefonía, las minas auríferas y los bosques para la extracción maderera, entre otras empresas estatales productivas; es decir, aplicó las premisas básicas de la economía neoliberal de la época. A pesar de ello, la esperada reactivación por la paz tampoco se produjo, por el contrario, aumentaron el desempleo y el subempleo, mismos que entre 1990 y 1992 llegaron a cubrir dos tercios de la población económicamente activa (Vilas, 1994, p. 260).

En dicha coyuntura de crisis económica se inició el proceso de desmovilización oficial de 22,213 contras², entre 1990 y 1993 por lo menos 65,000 exsoldados fueron retirados del EPS, asimismo unos 5000 combatientes del MINT dejaron la institución³. El Gobierno prometió a los excombatientes, sin importar su signo político, una cantidad considerable de ben-

por lo que la victoria de Violeta Barrios de Chamorro, con el abierto beneplácito norteamericano, garantizaba tiempos de paz pues se acababa la razón de ser de la Resistencia Nicaragüense (RN), la fuerza beligerante que había combatido a los sandinistas. El conflicto bélico había iniciado cuando la Guardia Nacional somocista atacó a la población civil que apoyaba a los guerrilleros sandinistas; tras la derrota de la dictadura y con el FSLN victorioso, la guerra continuó con la contrarrevolución armada en la RN.

- 2 En la RN se desmovilizaron 150 líderes militares, 15,820 miembros de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), 1612 miembros de YATAMA, y 1154 miembros del Frente Sur; a ellos se sumaron los correos de la Contra que se encontraban heridos en sus hospitales y en campamentos.
- 3 En el caso de la RN se especuló que unos tres mil desmovilizados eran colaboradores, no propiamente hombres-arma y, en el caso del EPS, un 5 % era personal administrativo. Sin embargo, en ambos casos fueron personas cuyo modus vivendi fue la milicia y debían incorporarse a la vida civil con apoyo oficial.

eficios, entre los que se destacó la entrega de tierras rurales, ello con la finalidad regresarlos al campo como agricultores.

Para el caso particular de los excontras, se propuso la figura productiva de polos de desarrollo: una serie de unidades de producción en las que trabajarían los excombatientes en proyectos sustentables. Sin embargo, debido al elevado monto de inversión inicial, a la poca previsión gubernamental para financiarlos y a los problemas de propiedad de la tierra, estos prácticamente no se realizaron. Por su parte, los desmovilizados del EPS se enfrentaron a la discrecionalidad de las políticas de retiro e inserción productiva. A pocos se les entregó dinero; a menos, tierras; a otros, implementos agrícolas y a un reducido número, becas de estudio; lo que contrastó con la alta oficialidad que fue beneficiada con bienes inmuebles, vehículos y dinero.

En su campaña electoral, la presidenta Violeta Barrios había prometido la devolución de las propiedades a sus antiguos dueños, tanto a los que habían sido expropiados durante la reforma agraria sandinista como a los que las habían abandonado por la contienda bélica. Se inició entonces una contrarreforma agraria que devolvió la tierra a los tradicionales propietarios, contó además con una novedad, la de beneficiar a algunos excombatientes que se convertirían en pequeños propietarios rurales. A los que no obtuvieran tierras se les insertaría como trabajadores de las empresas agrícolas que se instalarían con la paz. Si bien el Gobierno encontró un núcleo importante de tierras subutilizadas –unas 200 mil manzanas (Beumeister, 1996, p. 267)–, estas fueron insuficientes para satisfacer las necesidades de los tres grupos de excombatientes; además era un requerimiento fundamental de refugiados, exiliados y los demandantes tradicionales –aproximadamente unos 60,000–. Evidentemente, el Gobierno solo pudo beneficiar a unos pocos, aun cuando realizó también la privatización de las propiedades estatales agrarias⁴. Con estas políticas se esperaba la reactivación del campo, sin embargo muchas cosas habían cambiado a lo largo de la década, Nicaragua había perdido su carácter agroexportador, sus campesinos perdieron el rol de productores de alimentos baratos y sus fuerzas productivas carecían de los medios necesarios para trabajar (Rueda Estrada, 2014, p. 183).

Al problema de la inserción productiva se sumó el reacomodo institucional. El Ministerio del Interior (MINT) se convirtió en Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Policía y el Ejército fueron reestructurados, por lo que la institucionalidad en materia de seguridad fue particularmente ende-

4 Oficialmente, para contar con más tierras disponibles para la entrega a los demandantes, se decidió privatizar la propiedad agrícola estatal, en los hechos: “El 70 % de los activos y empresas sometidos a privatización hasta 1992 habían sido objeto de devolución a sus antiguos propietarios, y solo 30 % se privatizó” (Vilas, 1993, p. 262). El Gobierno benefició a ciertos sectores –expropiarios, exiliados con poder político– en detrimento de los excombatientes y refugiados.

ble durante los primeros años del Gobierno chamorrista (Rueda Estrada, 2014). Recién concluida la desmovilización y ante los pocos avances en materia agraria, los excontras exigieron reuniones con el Gobierno y presionaron a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) –la instancia encargada de su desmovilización– a cumplir con lo acordado cuando entregaron las armas. Solicitaron la adjudicación inmediata de las tierras y el acceso a créditos para implementos agrícolas, hay que recordar que muchas tierras habían sido abandonadas por varios años debido a la inseguridad en el campo provocada por la guerra, y para hacerlas productivas nuevamente se necesitaban recursos. La poca planeación gubernamental y la ya mencionada crisis económica tampoco permitieron la ansiada reactivación económica, por lo que la lucha por la tierra y el financiamiento campesino se convirtieron en una batalla por la supervivencia de los contras, en particular, y de los excombatientes, en general. El incumplimiento de las promesas de campaña dio lugar a una serie de conflictos legales, sociales, económicos y políticos que atomizó aún más a la sociedad nicaragüense; debido a la veta agrícola de los excombatientes, la posguerra se volvió una lucha por la propiedad, ello como parte de las añejas guerras campesinas del país.

3. La inserción productiva o la pobreza compartida

Los excombatientes, independientemente de su signo político, habían entregado el arma a cambio de promesas abstractas para su inserción⁵; en los hechos quedó evidenciado tanto el incumplimiento de los acuerdos como lo limitado de los programas para su inclusión económica. Si se les entregó dinero este fue insuficiente pues no había empleo, si fueron tierras no tenían títulos de propiedad y no podían trabajarlas por falta de insumos. A ello se sumaba que la mayoría habían ingresado a la vida militar siendo adolescentes o niños, que habían perdido la mística del campo y que nunca habían sido parte de las actividades productivas, por lo que su inserción era más difícil⁶. A nivel subjetivo, en medio de la guerra, al mando de una columna de varios hombres o siguiendo las indicaciones de los jefes, se sentían poderosos, su mundo había sido transformado y fue evidente que para muchos se había borrado la mística de la vida campesina. Durante la guerra tuvieron un brusco ascenso social y después de su desmovilización veían cómo iban descendiendo, eran nuevamente los pobres del campo y el tránsito a ser campesinos pobres fue difícil.

5 Como ejemplo de las promesas abstractas, en el Protocolo de Managua se estableció que “los excombatientes que regresen a su lugar de origen, recibirán de parte de las estructuras del Estado el apoyo necesario para su inserción a la vida civil... el Gobierno de Nicaragua se compromete a prestar una ayuda económica mínima a cada desmovilizado” (INCEP, 1994, p. 589). Sin embargo no especifica ¿qué estructuras del Estado serán las responsables?, ¿qué consideran “apoyo necesario?”, así mismo la ayuda “mínima” tampoco está clarificada ni el monto ni sus características, pudo ser una libra de arroz o un dólar.

6 Los desmovilizados, y luego la mayoría de los rearmados, fueron principalmente jóvenes sin tierra, principalmente solteros y sin hijos, con poca o nula experiencia en la agricultura, sin un lugar en la sociedad de la posguerra, con mucho que ganar y poco que perder.

Si bien la CIAV-OEA había realizado algunos proyectos de capacitación en oficios, de construcción de viviendas e infraestructura (escuelas, caminos, puentes y puestos de salud) y de producción de alimentos básicos, la realidad superó dichos intentos. Los programas de inserción fueron insuficientes en su cobertura y solo se realizaron para los excontras, dejando a los excombatientes sandinistas en mayor indefensión. También se acusó a las instituciones y ONG de “excesivo burocratismo” y, sobre todo, de “inflar los precios de los apoyos otorgados en especie, por ejemplo, las casas con un valor de mil quinientos dólares en el mercado nicaragüense para las agencias eran tasadas en cinco y seis mil dólares” (El Negro, comunicación personal, 19 de octubre, 2006).

Según lo previsto en los acuerdos de desmovilización de la RN, el Gobierno debía entregar 50 manzanas de tierra a cada desmovilizado. Para cumplir con la cantidad acordada eran necesarias un millón 100 manzanas distribuidas por todo el país (CENPAP, 1992, p. 2). Para junio de 1991, el Gobierno afirmó que había entregado 409 mil manzanas de tierra a un total de 11,580 desmovilizados y que ya no habría más distribución. Con ello, la mitad de los excomandos no recibirían las tierras acordadas al entregar el arma⁷. Como contraste, las cifras del Centro Nacional de Planificación y Administración de los Polos de Desarrollo (CENPAP) eran que: “hasta diciembre de 1992, un total de 304,848 manzanas incluyendo las privatizadas [habían sido entregadas], beneficiando solamente a seis mil 573 desmovilizados, de los cuales seis mil 307 fueron por reforma agraria y 266 por las privatizaciones. Esto significa que el Gobierno había cumplido solamente con el 27 por ciento de la entrega de tierras” (CENPAP, 1992). Considerando cualquiera de las dos cifras, se dejó a la mayoría de desmovilizados sin medios reales de subsistencia.

La crisis en el campo se profundizó por “los pésimos resultados del ciclo agrícola 91-92. Según las estadísticas oficiales, la actividad productiva del sector agropecuario en 1991 registró su peor caída de los últimos años (-6 %) llegando a descender hasta los niveles de producción de 30 años atrás”. Es decir, las tierras entregadas no producían lo suficiente, aún así los excombatientes demandaban su entrega o bien las tomaban por la fuerza, “entre 1991 y 1992 se produjeron 220 y 162 ocupaciones de tierra respectivamente... tan solo en Matagalpa durante 1991 fueron ocupadas 42,800 manzanas por miembros de la RN y precaristas” (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.132).

7 Para Cuadra, L., y Pérez, I. la cifra de entrega de tierras es diferente “el Gobierno redistribuyó, a partir de abril de 1990 un total de 701,500 manzanas, a unos 24,542 beneficiarios; priorizando a los demandantes de tierra, los desmovilizados de la RN, retirados del Ejército y gobernación, demandantes tradicionales y campesinos repatriados... en el actual proceso de reforma agraria se han dado 2.9 millones de manzanas redistribuidas” (1998, p. 132).

El Gobierno consideró desmovilizados a 72 mil oficiales del EPS y 22,413 de la RN, de ellos 28,000 se habían insertado en el sector agropecuario, 33,400 en el industrial y 21,500 en el comercio (Saldomando, s/f, p. 2). A ello es necesario agregar los cesanteados del MINT, de los que no hay números precisos. Con estos datos se suponía que 82,900 excombatientes estaban insertados, la diferencia, unos 11,100 no estaban en el aparato productivo; independientemente de la precisión de los datos y del optimismo oficial, la realidad no era tan prometedora. Desde septiembre de 1990, la situación económica en Nicaragua fue grave, el 70 % de la población del campo se encontró en extrema pobreza e incluso se habló de hambruna, así lo manifestó Francesco Vicenti, representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país, advirtió que: “la situación social en Nicaragua es preocupante y se agudiza por la presencia de grupos vulnerables como refugiados, repatriados y desmovilizados” (END, 1990f).

Lejos de mejorar la situación económica, en 1994 empeoró, con datos del Instituto Nicaragüense de Estadística y Censos (INEC), el 53 % de la población económicamente activa se encontraba fuera del mercado de trabajo y el 66 % llevaba meses en el desempleo (END, 1994u). Muchos de ellos eran excombatientes. Otro informe de la ONU proporcionó información verdaderamente preocupante, el 75 % de la población se encontraba debajo del nivel de pobreza. La organización se dijo sorprendida de que “no haya estallido social” (END, 1994z). Para ese momento el rearme era un hecho, la ONU no lo estaba considerando, pero los excombatientes en armas fueron indudablemente parte de una movilización social ante la situación de pobreza extrema del país.

En definitiva, los desmovilizados durante la paz estaban en peores condiciones que durante la guerra. Esa fue la realidad a la que se enfrentaron, no tuvieron las herramientas para integrarse a la nueva vida, estaban acostumbrados a una vida subsidiada como la que llevaron en la milicia y, a pesar de los rigores de la guerra o debido a su edad, perdieron –o nunca tuvieron– el hábito del trabajo. Evidentemente al terminar la guerra, los subsidios disminuyeron para los contrarrevolucionarios, el Gobierno de Estados Unidos y la CIAV-OEA fueron poco “generosos” después de la desmovilización (END, 1990h)⁸; asimismo, ni el Gobierno ni el Ejército o el ex MINT se hicieron cargo de sus exmiembros lanzados a la calle sin las prerrogativas necesarias. Los excombatientes que buscaron la vida en el campo no tuvieron los apoyos suficientes y los que no querían dejar la vida de la guerra tuvieron la ocasión precisa para continuar luchando, unos por reivindicaciones, otros por coraje o bien el puro deseo de seguir enmontañados.

8 En palabras de la exembajadora norteamericana ante la ONU Jeane Kirkpatrick: “Centroamérica, que una vez fue considerada como ‘el lugar más importante’ en el mundo para EE. UU., ya no es una prioridad política para Washington, una vez desaparecido el fantasma del comunismo en la zona” (END, 1990h).



3.1. La violencia de la posguerra

El tránsito de la guerra a la paz se consiguió de manera tangencial con la firma de los acuerdos de desmovilización de la Contra⁹, sin embargo, la violencia no se acabó con el cambio de Gobierno. En un país que durante más de una década dirimió sus diferencias políticas por medio del fusil, la búsqueda de formas democráticas de solución de conflictos tomaría varios años. La constante durante la posguerra fue la ausencia de canales oficiales de representación y, sobre todo, de espacios de gestión de los asuntos públicos; hay que recordar que se trató de un Gobierno sin experiencia previa que además pretendió des-sandinizar al país, lo que condujo a una institucionalidad endeble¹⁰. A lo anterior debe sumarse que el revanchismo se ejerció desde los dos espectros políticos: tanto los sandinistas como los antisandinistas buscaron por medios poco civiles imponerse a sus antagonistas. Tras una década de conflicto bélico, la violencia en los años siguientes se ejerció en todos los niveles de la sociedad¹¹, pero en mayor medida en el campo, y se debió básicamente al rearme de excombatientes, protagonizado por desmovilizados de la Contra, del EPS y del MINT que retomaron las armas para presionar al Gobierno para que cumpliera con las promesas realizadas durante sus procesos de desmovilización.

Para entender el rearme y la violencia en el campo durante la posguerra se deben destacar cinco elementos. El primero fue la seguridad: después de una década de guerra ni sandinistas ni contras se sentían seguros de convivir con excombatientes antagónicos. El segundo elemento fue la precariedad de sus condiciones de vida después de entregar el arma, además sus posibilidades laborales eran mínimas por la crisis económica. En tercero fue el ya mencionado problema agrario y la necesidad de la entrega de tierra como forma de inserción productiva. El cuarto elemento fue la incapacidad de algunos excombatientes de olvidar un pasado militar donde el poder y la razón, así como la seguridad económica, se obtenían con el uso de las armas y la violencia. Y el último elemento para entender

- 9 Entre los acuerdos destacan: Tocontín, Addendum al Acuerdo de Tocontín, Acuerdo de Cese del Fuego Efectivo y Definitivo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, Protocolo de Managua sobre Desarme, y el Acuerdo para el Establecimiento de los Polos de Desarrollo entre el Gobierno y la Resistencia Nicaragüense.
- 10 Desde 1990 hasta 1994 se dio la reorganización del Ejército Popular Sandinista (EPS), que cambiaría su nombre a Ejército Nacional de Nicaragua, y el reacomodo de la Policía Nacional, es decir, la reorganización de las instituciones de seguridad se efectuó en el momento en que se presentaba un grave problema de inseguridad.
- 11 Incluso la presidenta Violeta Barrios sufrió la violencia en carne propia, cuando en 1991 asistió a la boda de su sobrina. El hotel Intercontinental donde se celebraba el evento fue "rafagueado" con un fusil AK 47, un total de 18 balas penetraron las instalaciones con saldo de 2 heridos. Días después dos excontras fueron detenidos por su participación: Carlos García, alias Chino 85, y Maximino Rodríguez Martínez, alias comandante Wilmer, eran considerados extremistas de derecha y cercanos al presidente Virgilio Godoy, además el vehículo usado en el ataque pertenecía "al Instituto de Repatriación que dirige el excabecilla contra Óscar Sobalvarro 'comandante Rubén'" (END, 1991e).

el rearme fue la facilidad para recuperar u obtener armas¹². En la década de los ochenta estos hombres y mujeres habían empuñado el fusil para defender sus ideales, también lo harían en los noventa para exigir mejores condiciones de inserción en la posguerra.

Los primeros en rearmarse fueron los desmovilizados de la Contra; el rearme significó retomar las armas una vez que estas habían sido entregadas durante los procesos de desmovilización de la Contra, retiro para el EPS y cesantía del MINT. Los recontras fueron grupos conformados por excombatientes de la Resistencia Nicaragüense (RN) –excontras– que retomaron las armas a finales de 1990 con el argumento de defenderse de las acciones vengativas y de las represalias de los sandinistas. También exigían al Gobierno tierras, viviendas, legalización de las propiedades entregadas y otros elementos que consideraban parte de los acuerdos de desmovilización. Como contraparte nació el movimiento de recompas, grupos integrados por exoficiales y excombatientes del EPS, así como campesinos simpatizantes del sandinismo. Se les llamó recompas porque los sandinistas se llaman entre sí “compañeros” y su apocope es “compa”, a esto se les agregó el prefijo “re”, porque volvieron a tomar las armas para defenderse de los ataques de la Recontra y equilibrar la fuerza que este último movimiento había adquirido.

Posteriormente surgieron los revueltos, nombre que se debe a la inclusión en sus filas de excontras y exsandinistas que, sin importar las diferencias ideológicas de la década anterior, exigían reivindicaciones comunes, entre ellas el cumplimiento de las promesas expresadas por el Gobierno para la inserción de los excombatientes.

Finalmente, surgen los rearmados, se les empezó a designar así a los diferentes grupos que volvieron a las armas como presión política negociadora. Este nombre –en muchos sentidos– implicó el despojo del pasado de lucha de los excombatientes organizados, a quienes no diferenciaba de otros grupos de delincuentes armados, lo que implicaba una negación tácita de sus derechos reivindicativos.

El origen, finalidad y financiamiento de los grupos en armas fue debatido principalmente en la prensa escrita nicaragüense. Para la derecha, los recontras fueron excontras que se defendían de la violencia ejercida por el ejército sandinista y sus simpatizantes, que además mataban a sus miembros selectivamente (*END*, 1991c). Para los sandinistas, se trató de violentos excontras que aprovecharon la posguerra para continuar con sus

12 El Gobierno sandinista había entregado 100.000 armas a la población civil durante la guerra para la protección de los ataques de La Contra sin un registro minucioso. La Contra guardó en buzones armamento a causa de la inseguridad percibida durante y después de su desmovilización. El Gobierno de Violeta Barrios inició la mercantilización de las armas al comprarlas a los pobladores, y el tráfico ilegal se incrementó.

tropelías y que atentaron contra las instituciones heredadas de la revolución como el Ejército y la Policía (END, 1992r). Para la derecha, los recompas eran los peones guerrilleros del expresidente Daniel Ortega, que buscaban recuperar sus prerrogativas perdidas; para los sandinistas, eran oficiales y simpatizantes sandinistas echados a la calle por las atroces políticas del Gobierno neoliberal, por lo que buscaban una forma de ganarse la vida. Todas las opiniones tenían una dosis de verdad, desgraciadamente la sobreideologización que se le dio a los movimientos por parte de medios de comunicación, de los políticos y de las autoridades no permitió ver el fondo del problema, la innegable necesidad de los excombatientes.

Las acciones del rearme tuvieron lugar en las mismas zonas y regiones donde se desarrolló el conflicto armado de la década de los ochenta: Matigüas, Santa María de Pantasma, Waslala, San Juan Limay, Wiwilí, El Cuá, Yalí, El Ayote, Quilalí, El Jícaro, La Concordia, La Trinidad, Río Blanco, etc. Es decir, la zona que se conoce popularmente como “el norte” de Nicaragua, mismo que comprende fundamentalmente las regiones I y VI. Cabe aclarar que la división geográfico-administrativa de este artículo es la vigente en los años noventa, así la región I está conformada por los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia y la región VI por Matagalpa y Jinotega, conocida esta última como “Las Segovias”¹³.

13 Las otras regiones eran: región II (departamentos de León y el de Chinandega), región III (Managua), región IV (departamentos de Granada, Carazo, Masaya y Rivas), región V (Jugualpa, Boaco y Chontales), región VII (Región Autónoma del Atlántico Norte -RAAN), región VIII (Región Autónoma del Atlántico Sur - RAAS y Río San Juan).

Mapa 1
División geográfico-administrativa de Nicaragua (1990)



Fuente: Elaboración propia utilizando QGIS 2.8.

El rearme se inició a mediados de 1990 y, a partir de 1991, su frecuencia, fuerza y violencia se incrementaron considerablemente para ser muy explosivos entre 1992 y 1993. Como respuesta, el EPS asumió el compromiso público de redoblar esfuerzos para alcanzar avances sustantivos en el proceso de pacificación, y ahondar en los resultados de un plan general de desarme de civiles. Estas actividades estaban previstas para realizarse al mismo tiempo que se llevaba a cabo la restructuración profunda de la institución, así como de la Policía Nacional. A pesar de ello, el EPS continuó con sus actividades (Rueda Estrada, 2014) en 1991 tenía registradas 1,600 actividades ilegales y 87 personas muertas en estos actos. Los registros de 1992 serían mayores, como se describe en el cuadro 1.

Cuadro 1
Actividades registradas por el EPS entre marzo y mayo de 1992

Mes	Lugar de desmovilización	Grupos desmovilizados y armas requisadas	Notas
Marzo, 1992		6,514 recontras 3,411 recompas 6,352 armas y pertrechos	
Abril, 1992	Sin Sin, Maniwatla y Las Minas	877 recontras 94 recompas 621 armas	Negociaciones con Yatama y otros grupos de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)
Mayo, 1992	Tomatoya y El Dorado	5,236 recontras 5,773 recompas 7,052 armas	Plan Contingente Verano 92. Acuerdos para la desmovilización de los líderes "El Indomable", "Dimas" y "Moisés", "El Campeón" y "Bigote de Oro"

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por el EPS (END, 1992g).

En tres meses, los números netos de desmovilización fueron de 12,627 recontras y 9,278 recompas y la recolección de 13,980 armas (END, 1992f). Por los éxitos obtenidos y ante la creciente actividad de diversos grupos en armas, se realizó una tercera fase que funcionó únicamente para recoger armamento, ahí se logró recabar 22,197 armas, lo que dio un total durante el primer semestre de 1992 de 36,000 instrumentos militares (END, 1992f) y la desmovilización de 12,700 hombres (END, 1992t)¹⁴. La cifra mencionada es significativa pues refleja que en solo unos meses, el Ejército había desarmado a un número que representaba la mitad de quienes habían pasado por el proceso de desmovilización que dio lugar a la desaparición de la Resistencia Nicaragüense (RN) en 1990. El primer informe semestral de 1992 concluyó con la siguiente declaración:

Nuestra institución armada considera que las protestas de los demandantes como los retirados del EPS y Gobernación, de la ex-RN, de Revueltos, ex contras y ex recompas [sic], tiene muchos aspectos en una base justa, especialmente en lo relativo al incumplimiento por parte del Gobierno de algunos puntos de lo acordado. Pero queremos recalcar a estos demandantes que tal hecho NO JUSTIFICA protestas armadas (END, 1992f).

14 A pesar del éxito del programa, la situación seguía siendo grave, tan solo en Matagalpa se calculó había más de 300 hombres armados (END, 1992t).

A pesar de los discursos de paz y la solidaridad con los rearmados, la violencia continuó. Las autoridades de Jinotega afirmaron que las acciones combativas seguirían y que doce miembros del EPS eran lisiados de guerra de las recientes actividades armadas, principalmente las realizadas en contra de las bandas armadas dedicadas al robo de ganado. A mediados de 1992, el número de rearmados era de 21,905 entre recompas y recontras (Ejército, 1998)¹⁵, lo que significó que dos años después de la desmovilización de la RN casi el mismo número de hombres estaban nuevamente armados. Las dimensiones del rearme fueron enormes, aunque siempre fueron minimizadas por las autoridades, para Ángel Saldomando:

La cifra de rearmados por el lado de la Resistencia llegó a representar el 60 % del total de desmovilizados. Por parte de los exmiembros del EPS los rearmados representaron el 54.4 % de desmovilizados en las regiones I, V y VI. Estas cifras indican que alrededor de 23,950 hombres han participado en el ciclo de rearme. Esta estimación puede incluso ser conservadora si tenemos en cuenta el testimonio de un oficial de la BED, quien mencionaba una cifra "informal" de 43,000 personas no catalogadas oficialmente como desarmados a finales de 1992 (Saldomando, s/f, p. 21).

Para 1993 la situación en Estelí, Madriz y Nueva Segovia (región 1) se tornó más violenta; operaban ocho grupos identificados como recontras, dos recompas y otros diez grupos a los que era difícil caracterizar. A pesar de los avances del año anterior, para el primer trimestre de 1993 la situación empezó a estancarse pues solo se logró la desmovilización de Tarzán y 48 de sus hombres, de las 4500 armas que se esperaba recuperar solo se obtuvieron 820, además se alzaron cuatro nuevos grupos, "para un total de 38 grupos armados con 1035 hombres" (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.105). El EPS informó que en total operaban "en la V región 11 grupos con 350 hombres, en la VI región 14 grupos que reúnen 180 hombres" (END, 1993b). En marzo de 1993 en la región I y VI actuaban unos 600 hombres armados, de ellos solo 80 eran recompas, tan solo en ese mes en la zona montañosa de La Dalia, Matagalpa y Jinotega murieron 46 personas en 27 combates (LP, 1993b). A pesar de los intentos, es difícil precisar el número exacto de hombres alzados en armas a mediados del año 1993; el diario *La Prensa* calculó unos 400 hombres activos, para el investigador Ángel Saldomado la cifra era entre 1200 y 1400 rearmados (Saldomado, s/f, p. 17).

La situación de rearme-desarme-rearme fue un círculo vicioso: cuando los desmovilizados entregaban el arma, las autoridades adquirían nuevamente una serie de compromisos, ante el incumplimiento de estos se daba un nuevo rearme. Así, en las sucesivas fases de rearme y desmovilización, los grupos obtenían un poco de tierra; otros, materiales de construcción o instrumentos agrícolas; ante la diversidad de necesidades y beneficios el

15 Para la CIAV-OEA tan solo en Jinotega había unos 1200 hombres armados (END, 1992a).

Gobierno decidió, a partir de 1994, la liquidación monetaria como indemnización directa a los desmovilizados.

En septiembre de 1994 el Gobierno decidió otorgar entonces una indemnización de 4000 córdobas a 2463 recontras y recompas en concepto de finalización de los acuerdos... una rápida estimación indica que alrededor de 200 millones de dólares fueron destinados o están en curso de ejecución por parte de la cooperación externa. De un total de 27 programas, al menos 14 mencionaban explícitamente su contribución a la pacificación. El Gobierno por su parte, aportó unos 23 millones de dólares (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.124).

El Gobierno gastó entonces una fuerte cantidad de dinero a manera de prebendas y no en inversión para la reinserción de los excombatientes. Con ello, la lucha reivindicativa y justa de los desmovilizados se volvió una transacción monetaria; sorprende la cantidad invertida para “apagar el fuego” pues esos recursos hubieran podido ser utilizados de manera productiva. A pesar de la intensa labor del EPS y de la Brigada Especial de Desarme (BED)¹⁶ en los múltiples procesos de desmovilización, la situación siguió siendo caótica y se prolongó por varios años. En noviembre de 1994, la violencia estaba afianzándose también en la costa caribe, donde las comunidades misquitas empezaron a combatir a los grupos armados, principalmente a aquellos que buscaban refrescarse en la zona después de realizar actividades violentas. En noviembre el EPS informó sobre las actividades armadas en la RAAN, detectó 583, entre ellas 50 asesinatos, 45 secuestros, 48 asaltos y 31 quema de vehículos. En total, registró 92 combates con 66 muertos, 75 heridos y 5 capturados, logró la desarticulación en combate de “85 bandas” además de la desmovilización de otras cinco¹⁷, también mencionó el contacto establecido con otros 34 grupos armados (END, 1994x).

Un año después, en septiembre de 1995 durante la presentación de uno de los muchos planes para asegurar las cosechas del café, el EPS anunció la movilización de 3000 hombres en Jinotega y Matagalpa, donde operaban unos 220 “delincuentes”, integrados en 40 bandas (END, 1995I). En el informe anual del EPS, en diciembre de 1995, las cifras publicadas fueron contundentes: 136 delincuentes “aniquilados”, 88 bandas delictivas desarticuladas, 81 heridos, 385 capturados, 175 desmovilizados, más de 300 armas de guerra incautadas; además, 3000 efectivos combatieron en 132 ocasiones, 29 militares cayeron en el cumplimiento de su deber y

16 La Brigada Especial de Desarme (BED) fue una agrupación sui generis creada en el seno del Ejército sandinista con participación del Ministerio de Gobernación, de la Policía así como desmovilizados de la RN y civiles que conformaron las comisiones de paz, las cuales lograban el acercamiento con los grupos en armas. Su finalidad era ayudar a detener los conflictos en el norte de Nicaragua por medio del desarme de sus grupos que habían retomado las armas. A pesar de sus amplios logros fue desmovilizada en 1995. Sobre la BED véase Arévalo Cuadra (2007).

17 Entre las agrupaciones desmovilizadas sobresalen las lideradas por Carlos Acuña, Estrada, Águila Negra, Coral y Carlota, este último había sido particularmente activo desde 1992 (END, 1994x).

267 resultaron heridos, la institución logró reducir a 459 la cantidad de delincuentes armados, ello es significativo pues según sus propios datos en 1994 eran 1695 (*END*, 1995r). Es decir, a pesar de los esfuerzos oficiales de desmovilización, al no atenderse las graves condiciones económicas de los desmovilizados, la violencia no cesaba y la entrega de dinero a los rearmados mandaba la señal a los excombatientes de que el rearme era una manera de conseguir dinero fácil. De allí que los ciclos de rearme y desmovilización se volvieron la constante durante el primer quinquenio de la década de los noventa. Un total de 52 acuerdos oficiales se firmaron entre 1991 y 1995, principalmente por intermediación de la BED.

El Gobierno gastó dinero en la desmovilización y en operaciones militares, pero no realizó los suficientes programas sociales para los excombatientes. Estos regresaban a las armas, lo que creó más inseguridad entre la población campesina que también se armaba o, al menos, apoyaba a los rearmados para que los defendieran de los grupos contrarios. Se trató –como se mencionó– de un círculo vicioso en el que se mezcló, por un lado, la ineficiencia gubernamental para instaurar políticas de inserción civil para los desmovilizados y la necesidad de recursos por parte de los excombatientes y campesinos; y, por el otro, la evidente incapacidad de varios desmovilizados de insertarse civilmente así como el gusto por las actividades delincuenciales.

Como bien afirma el historiador inglés Eric Hobsbawn (1974), en todas las sociedades convulsionadas después de la guerra se dan grupos en armas, son los excluidos del mundo campesino que conforman rebeliones que no logran transformarse en revoluciones sociales “cuyos militantes se han visto obligados a reemprender de nuevo su vida de ladrones y de hombres al margen de la ley: hambrientos, amargados y resentidos”. Se trató de “hijos de la violencia, que a partir de las cenizas de sus casas, los cadáveres de sus padres, los cuerpos violados de sus madres y hermanas se lanzan a una vida al margen de la ley” (Hobsbawn, 1974, p. 79). En el caso nicaragüense se trató de los jóvenes que crecieron durante la guerra, que iniciaron la vida militar a muy temprana edad por gusto, por un secuestro o por conscripción obligatoria. Al desarmarse, su anterior forma de vida (la militar) estaba destruida o colapsada y la sociedad había cambiado por los rigores de la guerra por lo que no encontraron su lugar; como una paradoja, el rearme fue parte de su empeño de adaptación a la vida civil por medio de la única forma que conocían: el uso de las armas¹⁸.

La gran cantidad de grupos y la multiplicidad de demandas hicieron difícil una cuantificación precisa de sus reivindicaciones, su ideología y sus anhelos. Las autoridades empezaron a llamarlos “rearmados”, un concepto que

18 Para un análisis más amplio de la caracterización de los rearmados como bandoleros sociales véase Rueda Estrada (2007).

sirvió para definir a cualquiera que tomara las armas, fuera con una causa política o social, o meramente delictiva. Así, las muertes causadas por el rearme solo fueron sumadas a la lista de bajas, al daño colateral de la posguerra sin identificar con claridad las causas profundas de la violencia. En Nicaragua, el fin de la guerra no significó la paz; por el contrario, la violencia de la guerra se transformó en la violencia de la posguerra, la sociedad supuestamente “pacificada” enfrentó primero una serie de problemas sociales y después de índole delictiva a los que no estaba acostumbrada. Durante la década de los ochenta el germen de la violencia había sido la guerra interna de tinte político-ideológico, la finalidad era derrotar en el campo de batalla al enemigo; durante los años noventa se trató de una violencia social pues los hombres en armas luchaban por insertarse en la sociedad de la mejor manera posible.

3.2 Las primeras acciones delictivas de los excontras

El proceso de desmovilización de la Resistencia Nicaragüense estaba en curso cuando varios grupos de excontras iniciaron la tala ilegal de árboles en la frontera con Honduras para comercializar la madera. Se calculó que unas doce mil hectáreas de maderas preciosas fueron destruidas en El Paraíso, departamento de Madriz, en la frontera con Honduras (*END*, 1990a). Meses después se descubrió que dicha madera había sido vendida en Estados Unidos (*END*, 1990c)¹⁹. En el Departamento de Río San Juan y en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) pasó algo similar con la madera derribada por el huracán Juana; se supone que también llegó a Estados Unidos por mediación de Israel Galeano, alias comandante Franklin, conocido de manera irónica como Míster Caoba (*END*, 1990g).

Otros grupos de excombatientes de origen contrarrevolucionario iniciaron el robo de ganado en el norte de Nicaragua; se trató de grupos de entre cinco y diez hombres cuyos jefes era conocidos con los sobrenombres de Kraffor, Kalimán, Mala Yerba y Rubén Tinoco, entre otros²⁰. Si bien, en un principio se pudo tratar de una manera de solucionar la imperiosa necesidad de obtener recursos, con el tiempo, para algunos, se convirtió en una fuente de ingresos constante; las autoridades detectaron y posteriormente publicaron una lista de reincidentes, que además amenazaban de muerte a los campesinos y a pequeños productores. Entre los ladrones se encontraban los llamados Calandria, Caballito, Tello, La Fiera, Peligro, Macho Negro, Rojito y Cinco Pinos (*END*, 1991g). En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), se detectaron 50 casos de robo de gana-

19 Ese mismo año, el de 1990, el Gobierno entregó en concesión a Atlantic Timber Corporation (ATIMCO) una extensión de 8333 hectáreas de bosque tropical para la explotación maderera, ello sin mediar indemnización o pago por el derecho de aprovechamiento del recurso (*END*, 1990b).

20 A lo largo de 1991, las autoridades empezaron a detener a las bandas de asaltantes, tan solo una de ellas, integrada por siete excontras, había robado 117 reses, 68 bestias caballares y 7 mulas de una empresa estatal (*END*, 1991a).

do en pocas semanas (*END*, 1991h). Las actividades delictivas de estos grupos incluyeron también robo con intimidación, violación, y amenazas a pequeños y a medianos productores; según los pobladores eran unos 2000 hombres (*END*, 1990e).

Con el paso del tiempo, las actividades delictivas de algunos rearmados se volvieron más sofisticadas; incluyeron el asalto a cooperativas, camiones, vehículos y bodegas (*END*, 1991m); otras agrupaciones empezaron a robar los insumos de los proyectos de la cooperación internacional, así como equipo de la CIAV-OEA y de varias organizaciones civiles, como medicinas y alimentos, para posteriormente venderlos (*END*, 1992g). Finalmente, tuvo lugar el primer asalto a un banco, el 18 de octubre de 1991 un grupo recontra asaltó la sucursal El Bajazo del Banco de Desarrollo (BANDES) –a 70 kilómetros de la ciudad de Jinotega–, el botín fue de 150,000 córdobas (*END*, 1991n). Después fue asaltada la sucursal de Santa María de Pantasma, en este acto los recontras recibieron el respaldo popular, y en su fuga saquearon bodegas y tiendas campesinas (*END*, 1991i). Meses después otro grupo robó la sucursal de Bocay, el botín fue de 200,000 córdobas (*END*, 1992a).

Otra fuente de ingresos para los excontras fue el tráfico de drogas a Estados Unidos. Desde los inicios de los años ochenta, y con el financiamiento norteamericano a la RN, se documentó que aviones descargaron armas y pertrechos militares en Nicaragua y regresaron a Estados Unidos con las sustancias ilícitas (Bardini, 1988 y Santana, 2004). La publicación en 1989 del Informe Kerry reveló y comprobó detalles que involucraban directamente a agencias gubernamentales de Estados Unidos durante las dos presidencias de Reagan, a oficiales de las fuerzas armadas en varios países centroamericanos y a la Contra, en operaciones de tráfico de drogas como parte de la política contrarrevolucionaria de Washington (Chomsky, 2003, p. 210). El informe decía: “la política de Reagan a favor de los contras contribuyó con el envío ilegal de droga hacia Estados Unidos”. Esto puso al descubierto la vinculación de los principales dirigentes de la Contra con las estructuras internacionales de narcotráfico, el auspicio y protección que recibieron de agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, y el papel estratégico de los militares hondureños y salvadoreños como Roberto D’Aubuisson (Chomsky, 2003, p. 167). Esta actividad ilegal, realizada por algunos mandos de la RN, continuó después de su desmovilización oficial. En julio de 1990 se detuvo a un grupo de excontras que colaboraban con el cartel de Cali en el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos: “La sección de estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica descubrió... una nueva ruta entre Colombia y Estados Unidos vía Bluefields en Nicaragua” (*END*, 1990d).

En estas actividades colaboraron excontras que no entregaron las armas

o bien que las guardaron como un seguro económico o de vida, dada la inseguridad del país. También fueron herramientas de trabajo para las actividades de narcotráfico (*END*, 1991b) o bienes para vender cuando el Gobierno inició la compra de armamento. Ante su precaria situación económica y la oportunidad creada por el Gobierno, algunos excombatientes –también ciudadanos– ingresaron al redituable comercio de armas. El Gobierno sandinista había entregado armas a la población para defenderse de los ataques de la Contra; con el fin de la guerra, las armas debían ser recuperadas; el Gobierno de Violeta Barrios decidió, en 1993, iniciar la compra del armamento en manos de civiles; esta política fue criticada por amplios sectores de la población pues inició el comercio legal de instrumentos bélicos con el Gobierno como principal comprador. Por ejemplo, el excontra Rodolfo Ampié –líder de la Asociación Cívica de la Resistencia Nicaragüense– enfatizó las consecuencias de la mercantilización de las armas: “es un error que ahora las autoridades gubernamentales tendrán que soportar” (*END*, 1992c). Efectivamente, con la finalidad de desmilitarizar el país y de detener el rearme, las autoridades utilizaron mecanismos equivocados que provocaron la comercialización del arsenal y el surgimiento de intermediarios en el proceso, estos últimos obtuvieron abundantes ganancias a costa de la pobreza de los desmovilizados y del erario que pagaba el sobreprecio. Ampié, además, propuso que el Gobierno entregara tierra, herramientas, financiamiento, insumos, medicinas y viviendas, así como no usar esos recursos en compra de armas (*END*, 1992c). La propuesta tenía un sustento pues con datos de la mencionada Asociación Cívica para 1992 un 70 % de los exmiembros de la Contra no habían tenido acceso a un pedazo de tierra y pocos obtendrían ese beneficio en el futuro.

Otra de las secuelas de la guerra fue el destino de las armas utilizadas en la década de los ochenta y no entregadas al Gobierno. Desde 1991, las autoridades encontraron buzones de armamento, uno de ellos fue localizado gracias a la información proporcionada por los pobladores en Greytown (*END*, 1991b). Nuevos buzones fueron descubiertos a lo largo de la frontera con Honduras por zapadores del ejército de ese país, en ellos se encontraron grandes cantidades de pertrechos militares ocultos en depósitos subterráneos. Con las investigaciones se determinó que los excontras sacaban los instrumentos militares y los vendían en Honduras y en otros países (*END*, 1995m). Ese mismo año se informó sobre el contrabando de armamento en sentido contrario, es decir, del norte al sur, en este caso desde Estados Unidos hacia Nicaragua; la Dirección de Investigaciones Económicas y la aduana encontraron un cargamento con ametralladoras UZI, pistolas 3.80 y 9 milímetros, rifles con mira telescópica para francotirador y 2000 municiones para armas de distintos calibres; el contenedor había entrado por El Rama con una forma aduanal de utensilios de cocina a nombre de dos personas inexistentes (*END*, 1995q).

3.3. Los recontras y recompas: la violencia de la posguerra

Las notas periodísticas publicadas entre 1991 y 1994 ofrecen una larga lista de actos de violencia en el norte de Nicaragua. En un primer momento se trató de ajustes de cuentas entre los bandos antagónicos de la guerra, después se sumaron tanto el Ejército como la Policía que enfrentaban a las cada vez más poderosas agrupaciones armadas. En abril de 1991, en Wiwilí, Jinotega, tuvo lugar un enfrentamiento entre fuerzas de la Policía y del Ejército con un grupo de desalzados –como también se les llamó a los excontras en armas–; ahí murió Chapulín y un miembro del EPS que había sido secuestrado por los excontras (*END*, 1991d).

Las actividades delincuenciales eran realizadas únicamente por excontras. Sin embargo, el 21 de octubre de 1991 un grupo de recompas de la columna Pedro Altamirano desarmó a 20 policías que resguardaban la bodega de ENABAS en San Isidro y se llevó los granos; este asalto, por sus características, hizo evidente la necesidad de estos grupos ideológicamente más desarrollados (*END*, 1991o). Los recompas se caracterizaron por incluir en sus demandas las necesidades de la comunidad campesina en que operaban; exigían, además de la tierra: becas de estudio, cursos para ejercer algún oficio, fondos para crear cooperativas. Se trató, entonces, de guerrillas ideológicamente más preparadas –por su experiencia en la revolución sandinista– que realizaron actividades sumamente limitadas.

Algunos grupos recompas lograron establecer una base social bastante amplia. Solo así se entiende el apoyo que se les dio a los miembros del Frente Revolucionario Obrero Campesino (FROC) en su toma de Estelí, o la importancia que tuvo el Frente Unido Andrés Castro (FUAC) en el triángulo minero de la RAAN²¹. Por el contrario, otros grupos solo fueron capaces de sembrar miedo entre los campesinos, buscaron obtener la atención de la sociedad y de las autoridades por lo que sus actividades se volvían más mediáticas y sus resultados más limitados. Si bien todos los grupos armados tenían amplia experiencia guerrillera, sus acciones resultaban incluso arcaicas; ello se debía a que actuaban en grupos pequeños lo que les impedía realizar acciones de mayor envergadura. Eran capaces de tomarse una carretera o incluso un poblado, pero no de mantenerla bajo su mando; además esa no era su intención, jamás pretendieron consolidar un movimiento de grandes proporciones, por el contrario, solo buscaron realizar acciones que los hicieran visibles ante las autoridades, demostrar lo que eran capaces de hacer y lo peligroso que podía ser el desatenderlos. El rearme, en la mayoría de los casos, fue una forma de presión para la negociación con las autoridades. La lógica fue simple, quien ponga en vilo a las autoridades obtiene mayor atención mediática y, en consecuencia, mayores o mejores beneficios.

21 Sobre la toma de Estelí véase Rueda Estrada (2014); y sobre las propuestas sociales y políticas del FROC, véase Rocha (2001).

Es evidente que el movimiento de rearmados carecía de una ideología, prueba de ello es el mencionado movimiento de los revueltos que incluía entre sus filas a miembros de las dos facciones ideológicas contrarias de la guerra en la década anterior, es decir, se unían en la misma lucha quienes poco tiempo antes se habían enfrentado en el campo de batalla²². Sus fines eran reivindicativos y, en la mayoría de los casos, de tinte económico: corregir lo injusto de los procesos de desmovilización y retiro, y obtener algún beneficio para mejorar sus condiciones de vida. El surgimiento de los revueltos es también prueba fehaciente del malestar social. Basta recordar que el fenómeno inició en febrero de 1992 de manera paralela a la movilización social en la capital y en el campo. En Managua las movilizaciones fueron reprimidas por la Policía, que participó en desalojos a ciudadanos sin tierra ni vivienda; además los trabajadores fueron sumamente activos pues participaron en 1992 en siete huelgas de hambre, cuatro de ellas simultáneas (*END*, 1992w). Es importante destacar que, en el caso de las ciudades, participaron de manera activa los discapacitados de guerra quienes realizaron diversas movilizaciones para exigir el acceso a la salud y cuidados especiales por su condición. Por sus estrechos vínculos con otros grupos sociales con demandas, los revueltos son también un ejemplo de reconciliación: los unía la pobreza y la falta de mecanismos de inclusión social, económica y política.

Existieron grupos con ideologías más elaboradas como el Frente Unido Andrés Castro (FUAC). Este consideró que la posguerra daba una segunda oportunidad para corregir algunos errores en el campo; por el contrario, para otro sector no se trató de un asunto ideológico, sino de la oportunidad de mejorar en lo inmediato sus condiciones de vida; para otros excombatientes, los menos, se trató simple y sencillamente de una continuación de la vida militar después de la desmovilización. Este es el caso del Indomable, tristemente célebre por sus acciones delictivas, que en buena medida incidieron en la desfavorable opinión de parte de la sociedad y los medios de comunicación a los justos reclamos de varios grupos de excombatientes. El caso de José Ángel Morán “el Indomable” –o el Indomable en algunos documentos– es significativo en varios sentidos. En primer lugar, se dice que su levantamiento fue exclusivamente por razones de seguridad personal, como resultado del asesinato de su mujer en diciembre de 1990 (*END*, 1991)²³, esto lo diferenció de otros excombatientes armados que

22 En este caso de los recontras, recompas, revueltos y rearmados: “los desmovilizados parecen un retroceso en el desarrollo de los movimientos sociales, es decir de guerrilla organizada moderna pasaron a acciones armadas hasta cierto punto arcaicas... los cambios buscados no son radicales porque pretenden dejar intacta la estructura social básica, es en este sentido como se convierten en la forma más primitiva de reformismo” (Rueda Estrada, 2007, p. 24).

23 Durante la guerra de los años ochenta el Indomable fue acusado de cometer varios asesinatos y secuestros. Incluso la organización norteamericana Acción Permanente Cristiana por la Paz afirmó que en una reunión llegó a decir que los sandinistas eran comunistas y que “un comunista es bueno solo si está muerto” (“Los recontras”, 1991). Es probable que el argumento del rearme por seguridad fuera sobre todo una justificación pues conocía el gran número de enemigos que tenía por sus delitos pasados.

afirmaron que su rearme era la manera de exigir los beneficios no cumplidos por el Gobierno al gremio desmovilizado. En segundo lugar, era una persona cercana a la presidenta Violeta Barrios, quién incluso lo llamaba su amigo; la familiaridad entre ambos quedó demostrada cuando lo llamó a la reconciliación después de que un grupo de 80 hombres bajo su mando atacó Quilalí y combatió contra una unidad policial (END, 1991j). En tercer lugar, en los procesos de negociación, sus demandas eran evidentemente políticas pues buscaba una cuota de poder.²⁴ Morán negoció su desmovilización, incluso se desmovilizó pero no estaba dispuesto a dejar la vida del rearme, pues a pesar de la suficiencia de recursos –basta mencionar que el Gobierno le entregó 5,000 dólares en su última desmovilización– fue incapaz de dejar las armas; desgraciadamente no sería el único (END, 1992h)²⁵.

4. El origen del FN 3-80

Se tienen registrados por lo menos cuatro grupos llamados 3-80. En todos los casos el nombre hace referencia al máximo líder militar de la Contra que fuera asesinado en febrero de 1991, el coronel Enrique Bermúdez, alias “3-80”. Este era su número en la Guardia Nacional somocista.

El primer grupo fue conocido como la Brigada 3-80, conformada por unos 65 hombres al mando de California, que en mayo de 1991 entró en Honduras para obtener armas, luego regresó a Nicaragua y se instaló en Río Blanco. Se trató de un sector de la excontrarrevolución inconforme con el Gobierno de la señora Violeta Barrios y que también reclamó cuotas de poder para el vicepresidente Virgilio Godoy (END, 1991f).

24 En 1992 las autoridades lograron un acuerdo basado en siete puntos que buscó el desarme del Indomable: 1) excancelación de todos los miembros de la Contra acusados de delitos que no cometieron; 2) desarme de las cooperativas sandinistas; 3) desmilitarización de los pueblos de San Rafael del Norte, Yalí, La Concordia, Pantasma, Quilalí, San Juan de Río Coco, Jinoteguita, El Cúa y El Jícaro; 4) nombramiento de autoridades civiles en estos lugares; 5) enjuiciamiento de los miembros del FSLN que hayan asesinado a desmovilizados de la Contra; 6) destitución de jefes policiales que hayan cometido abusos; y 7) indemnización a los familiares de los desmovilizados que hayan sido asesinados (END, 1991k). Posteriormente, el Indomable rompió el diálogo y regresó al campo donde continuó con las actividades delictivas.

25 El Indomable fue acusado de asesinar a unas 30 personas, incluso miembros de su grupo armado. Su lista delincencial incluye también el asesinato de José Luis Meza Moreno y su secretaria Elizabeth Centeno Herrera. Meza era el capitán de la Policía de San Gabriel, en Jinotega (LP, 2001). El Ejército sandinista expidió la orden de captura “vivo o muerto” por lo que se dieron varios combates entre las fuerzas militares y el grupo que comandaba (END, 1991p). En febrero de 1992 finalmente el Indomable fue domado con 50,000 dólares (LP, 1993g), junto a él entregaron sus armas sus lugartenientes Estrella, Somotillo, Chalín y Serrano, y 190 soldados en Ducualí (END, 1992b). En la ceremonia de desmovilización. Morán fue enfático: “le exigimos al Gobierno que cumpla con los acuerdos, que cumpla con nuestra seguridad... y que cualquier grupo [armado] que se mueva después de esta negociación sea combatido y aniquilado si es necesario” (DiFilms, 1992). Anunció también que se iría a Miami pues no había garantías en Nicaragua para su seguridad, meses después se volvió a armar junto con algunos hombres y finalmente cayó en combate en la frontera con Honduras después de haber entregado las armas en dos ocasiones (END, 1992h).

El segundo grupo recontra 3-80 se asentó en Waslala, sus actividades las realizó entre 1992 y 1993, cuando finalmente sus 378 miembros fueron desmovilizados por las Brigadas Especiales de Desarme (BED), para el proceso se contó con apoyo de la CIAV-OEA y el Ministerio de Gobernación. Su desarme se logró a cambio de apoyos para la construcción de viviendas y nuevas promesas de tierra productiva, también bajo la amenaza de que si no aceptaban el desarme se les perseguiría como delincuentes del fuero común, independientemente de sus reivindicaciones como excombatientes (Vicenta, comunicación personal, 14 de octubre, 2006).

El tercer grupo es el 3-80 comandado por el Charro, Guapote²⁶ y Northiel. Inició actividades con mucha fuerza mediática pues inmediatamente después de su creación, en mayo de 1992, participó en violentos combates contra el EPS en las zonas montañosas de Nueva Segovia, Matagalpa y Jinotega (END, 1992d). Para evitar más violencia las autoridades iniciaron negociaciones con todos los grupos armados, y en forma persistente y constante con los líderes del 3-80, quienes fueron particularmente violentos en sus actividades (END, 1992e).

Es importante mencionar la dificultad de precisar las circunstancias que permitieron la unificación temporal de este último grupo con el cuarto 3-80, el Frente Norte 3-80 (FN 3-80). Estos eran recontras que actuaron en la zona de Quilalí, Nueva Segovia, de donde eran originarios sus 30 miembros fundadores. El grupo creció considerablemente pues llegó a conformar en 1994 una fuerza de 500 hombres. El FN 3-80 fue un grupo anclado en los vínculos familiares, su jefe máximo fue José Ángel Talavera Alaniz, alias el Chacal; su hermano Salvador Talavera, alias Esteban, fue el vocero del grupo; y también participó Alex Talavera, alias Chacalín, así como numerosos primos y sobrinos (LP, 1993l).

4.1. El Frente Norte 3-80

Las razones del levantamiento del FN 3-80 fueron, según su líder José Ángel Talavera, el clima de inseguridad en el campo, el incumplimiento de los acuerdos de desmovilización –principalmente en lo relativo a la entrega de tierras y créditos–, así como las irregularidades en la cesión de fincas, pues estas carecían de títulos de propiedad o no estaban debidamente registradas. Una de sus primeras acciones fue a finales de agosto de 1992, cuando un grupo al mando de Gavilán y el Chacal atacó la comunidad de El Cacao: quemaron una hacienda, dos tractores y un camión, también dejaron una serie de mensajes pintados en las paredes: “¿...y con los títulos de propiedad que pasó?”, “rinda cuentas señor Mendieta de la muerte de 140 desmovilizados de la resistencia” (END, 1992j).

26 Guapote, sin embargo, tuvo una vida relativamente corta en el rearme pues murió en un combate con el EPS en Matagalpa junto a siete de sus hombres en 1993 (END, 1993f).

El FN 3-80 adquirió notoriedad, pues llamó la atención que tanto sus trajes militares como sus armas lucían bastante nuevos, por lo que se conjeturó sobre el financiamiento norteamericano que recibían (END, 1992i). Según una nota del periódico Los Ángeles Times, grupos anticastristas exiliados en Miami ayudaban a los recontras “en su campaña contra el Gobierno de Chamorro... han brindado dinero y asesoramiento, pero no armas... con lo que han violado las leyes estadounidenses” (LP, 1993f). El FN 3-80 inicialmente procuró obtener la simpatía de diversos grupos de derecha para que en el futuro se tradujera en apoyo a la agrupación, pero con el desarrollo de los hechos sucedió lo contrario; distintos actores políticos empezaron a deslindarse. En ese sentido, llama la atención el desplegado del Gobierno de Estados Unidos en el diario La Prensa donde negó tener nexos con grupos radicales, las acusaciones directamente iban hacia el FN 3-80 y su notoriedad mediática:

el Gobierno de Estados Unidos no apoya, condona o anima ninguna de estas actividades... particularmente repugnantes... en contra de un Gobierno amigo como lo es el de Nicaragua... el Gobierno está preparado para procesar... a aquellos que violenten las leyes de neutralidad de Estados Unidos... [No obstante, hay] esfuerzos de individuos de Nicaragua que están intentando recoger fondos en los Estados Unidos para apoyar acciones armadas y violentas contra el Gobierno de Nicaragua, entre ellas las supuestas actividades del Frente Norte 3-80 recogiendo fondos dentro de los Estados Unidos (LP, 1993c).

A pesar de la postura oficial norteamericana, el apoyo al FN 3-80 es aceptado por su líder, el Chacal:

Había apoyo directo de Estados Unidos, pero teníamos colaboradores de Nicaragua, productores... Fue un movimiento bastante responsable, político, no estábamos enfrascados en matar gente... Nuestra estrategia fue planificada a defendernos y proyectarnos políticamente, darle a conocer al mundo entero, al mismo pueblo y al Gobierno que a nosotros se nos tenía que respetar y que en Nicaragua había un problema de persecución política, que no había condiciones para que la Resistencia estuviera totalmente desarmada y que merecía una atención especial la reconciliación y la pacificación (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 22 de noviembre, 2006).

Si bien Talavera no da nombres, se sabía que los vínculos políticos eran, entre otros, con Andrés Zúñiga e Indalecio Rodríguez, funcionarios del Gobierno de Violeta Barrios; Santiago Murray, coordinador de la CIAV-OEA²⁷; Arnoldo Alemán, alcalde de Managua; y el vicepresidente, Virgilio Godoy. Con este último tuvieron reuniones, una de ellas fue el 7 de julio de 1993,

27 Por su abierta simpatía a la lucha de la Contra durante la década anterior, Santiago Murray fue visto como “comandante general” de la Recontra, incluso se afirmó que en Quilalí vehículos de la CIAV aparentemente transportaban avituallamiento para el FN 3-80. (BI,1993a)

a partir de ahí los reclamos de tipo social del FN 3-80 cambiaron a un discurso más político; es de destacar su exigencia sobre la destitución inmediata del general Humberto Ortega del EPS para posibilitar el diálogo (LP, 1993d). Un mes después, el 10 de agosto, en medio de las festividades de Santo Domingo, patrono de Managua, dirigentes de la UNO se trasladaron a Estelí para reunirse con varios líderes de la Recontra, principalmente con José Ángel Talavera, el Chacal, ahí se supone que se negociaron las acciones para lograr la caída del Gobierno de Violeta Barrios (Vargas, 1993, p. 2). Para Óscar Sovalbarro, comandante Rubén, firmante de los acuerdos de desmovilización, el FN 3-80 es una creación de Arnoldo Alemán:

La única persona que encontró Arnoldo Alemán para que le ayudara a formar eso [un grupo armado] fue Indalecio Rodríguez y la única persona que encontró Indalecio para hacer eso fue su sobrino José Ángel Talavera y allí empezó el movimiento de los 3-80 financiado por Arnoldo Alemán desde la alcaldía, algunos simpatizantes y colaboradores radicados en Miami y algunos militares hondureños que Indalecio Rodríguez conocía y que había establecido alguna relación en el tiempo en que él fue director de la Contra en Honduras... En el tiempo de doña Violeta adquiere el FN 3-80 un compromiso de negociaciones de unas fincas y créditos y una cooperativa, cuando llega Arnoldo Alemán entonces le condona la deuda que andaba alrededor de 34 millones de córdobas, la deuda que tenían los chacales con el estado, Alemán los condona porque él fue el que los creó, su regalo (Óscar Sovalbarro, alias Comandante Rubén, comunicación personal, 2 de noviembre, 2006).

Independientemente de los rumores, lo que sí es comprobable, es que tras las reuniones con los políticos, las reivindicaciones del FN 3-80 se volvieron más políticas, y sus acciones más violentas y espectaculares. Parece posible suponer que tanto Virgilio Godoy como Arnoldo Alemán consideraban que la inestabilidad del país era benéfica para sus intereses pues de esta manera encontraban apoyo en ciertos sectores de la derecha radical; sin embargo, en los hechos la figura endeble, en cierto sentido, de la presidenta se transformó en su mayor fortaleza pues ante la opinión pública sus detractores ejemplificaban a los violentos y extremistas de siempre.

En el segundo semestre de 1993 se inició el acercamiento entre FN 3-80 y el 3-80 de Northiel. Como resultado, realizaron algunas actividades en conjunto, aunque limitadas en cuanto a temporalidad. Sobre la fugaz unión y la posterior ruptura entre los dos grupos, José Ángel Talavera afirmó:

Al final con Northiel si hubieron unas críticas que se dijeron, no me consta, él era aparte, no era de los de nosotros, tras que nos involucraron, la gente habla a veces que nos peleamos y teníamos diferencias, pero no era así, porque ellos tenían su propia organización y nosotros la nuestra, yo traté, como excompañeros de lucha que fuimos de que hiciéramos una sola organización y que hiciéramos un directorio y lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo y quedaron armados así... y después fueron ase-

sinados él y otro, y sí recibieron críticas de que se metían en ese y el otro problema (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 22 de noviembre, 2006).

Efectivamente, los métodos de lucha y las propuestas entre los diferentes grupos recontras eran divergentes. En los intentos de unificación, las reuniones podían ser sumamente violentas, por ejemplo en una celebrada entre el FN 3-80 y otros grupos para coordinar las acciones de un plan de mayor envergadura y establecer el liderazgo unificado, la discusión subió de tono y terminaron muertos cinco participantes, primero recibieron varias cargas de bala y finalmente fueron degollados (END, 1992l). Como ya se mencionó, la unificación fue endeble y efímera, aún así el FN 3-80 fue el protagonista del Plan 15 de Septiembre que inició con ataques a El Júcaro y Condega (END, 1992m); posteriormente en Teotecacinite, cerca de la frontera hondureña, y en La Concordia, donde fueron repelidos por el EPS que previamente había movilizado a 2000 efectivos; esta acción fue bautizada por el EPS como Repunte 92 e incluyó también la utilización de vehículos aéreos artillados para contener al Frente Norte 3-80 (END, 1992n).

El Gobierno mostró una ceguera selectiva pues algunos grupos eran considerados “con banderas políticas” y otros, como meros delincuentes. La caracterización usualmente se basaba más en afinidades que en análisis objetivos; sin embargo, por medio del teniente coronel Rodrigo González, jefe de la sexta región militar, el EPS aceptó:

[de manera] oficial la naturaleza política del movimiento FN 3-80 por ello el Plan Repunte 92... es una adecuación del EPS ante la nueva realidad [se trata entonces de la] operación militar de mayor envergadura y la más importante del Gobierno de Chamorro (END, 1992p).

Para González el elemento político era fundamental:

el discurso del incumplimiento es un elemento táctico que aglutina al campesinado alrededor de quien mueve esa banda dada la crisis socioeconómica que vive el país y el apoyo se refiere a ese respecto y no necesariamente a sus acciones o métodos de lucha (END, 1992p)28.

El problema es que todos los grupos en armas, de una u otra manera, hacían reivindicaciones campesinas y muchas de sus acciones eran difíciles de distinguir entre las de contenido político-reivindicativo y las delincuenciales.

28 El autor de la nota hace una aclaración importante: “delincuentes o brazo armado de un movimiento político es algo que parece decidir el alto grado de polarización política de la sociedad nicaragüense” (END, 1992p) y sobre todo, las simpatías de quien lo afirmaba.

La eficacia militar del Plan Repunte 92 permitió que el FN 3-80 y otros grupos se replegaran a Honduras, donde desgraciadamente la violencia se incrementó, pero según las autoridades militares también permitió que se estimulara “la desmovilización de irregulares al marco de la ley, sobre todo en la Quinta Región, donde unos 218 hombres han retornado a la vida civil” (END, 1992p). En contraste, seguían en armas otros grupos como el comandado por Ciriaco o Cipriano Palacios López conocido como el Charro, jefe del Estado Mayor del Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN)²⁹. Las autoridades militares tuvieron acercamientos, pero el Charro condicionó su desmovilización a la recomposición y des-sandinización del EPS y de la Policía, incluyó la destitución del general Humberto Ortega y la del ministro Antonio Lacayo, la devolución de propiedades a sus antiguos dueños y el cumplimiento de los acuerdos de Tocontín³⁰. Las condiciones fueron imposibles de cumplir y el diálogo pronto se rompió, con el paso del tiempo, según las autoridades, el Charro se volvió un delincuente ligado al narcotráfico³¹.

El EPS informó que entre julio y agosto de 1992 habían logrado desarticular a “34 bandas de delincuentes”, algunos recontras que no se habían desarmado se habrían integrado al FN 3-80, ahí se organizaron para realizar tres emboscadas, trece secuestros y siete asesinatos (END, 1992o). Es decir, a pesar de las acciones de desarme iniciadas por el Ejército, la violencia se incrementó; en el departamento de Estelí un grupo de doce hombres armados al mando de Peligro, lugarteniente del Guapote, ejecutó a siete personas, el ejército recuperó más de 100 casquillos de bala en el lugar (END, 1992k).

29 El Charro participó en los intentos de reunificación de los recontras en el Frente Norte 3-80 pues era parte del Estado Mayor de 16 comandantes entre los que se encontraban también Guapote y Northiel.

30 El Acuerdo de Tocontín (25 de febrero de 1990) incluía la necesidad de: “amparar a los lisiados, huérfanos y viudas, secuelas inocentes de la lucha armada, [el Gobierno] se compromete implementar después de asumido el poder doña Violeta Barrios de Chamorro, a que se asegure la rehabilitación y la readaptación social de los afectados. Asimismo tendrán derecho a las pensiones mensuales correspondientes... El nuevo Gobierno... se compromete a gestionar ante los gobiernos que correspondan ayuda humanitaria para los miembros de la Resistencia Nicaragüense, al igual que la infraestructura médica para la debida atención de las víctimas del conflicto durante el tiempo que dure la desmovilización” (INCEP, 1994).

31 En octubre de 1995, el EPS y el Gobierno iniciaron una campaña mediática contra el Charro. Los coroneles Rodrigo González y César Delgadillo afirmaron en un programa de televisión que él podía ser pieza fundamental en “las posibilidades [de] que el narcotráfico esté utilizando regiones del norte de Nicaragua para el trasiego y almacenamiento de drogas provenientes de Suramérica, con destino a Estados Unidos y Europa, ... es probable que a estas alturas se esté formando una red para trasladar drogas por las vías de Siuna, Waslala y Río Blanco..., zonas fronterizas donde no hay ninguna autoridad... es probable que el jefe máximo de los armados del norte Cipriano Palacios, el Charro, quien aglutina unos 220 irregulares, para poder sobrevivir pueda establecer contacto con el narcotráfico... en el norte operan 200 o 250 armados que no han accedido a nada, pero les quedan las siguientes opciones: desarmarse, ser capturados y procesados o aniquilados en combate” (END, 1995n). Dicha conjetura fue ampliamente difundida por la prensa nicaragüense como una verdad incuestionable, aunque no fue probada.

En octubre de 1992, el EPS anunció la desarticulación de 53 bandas delictivas, además afirmó, con cierta incredulidad, que: “en la 5.ª región, ya no existen grupos de recontras y recompas, sino algunas bandas delictivas dispersas, cuya desaparición total será a través de su desarme o en enfrentamientos militares con el ejército”. Posteriormente reconoció: “en la región [5] quedaron aproximadamente 1000 hombres, agrupados en 15 o 16 bandas armadas”; anunció también la inminente desmovilización de Mike-45 junto a 15 hombres y la suspensión de negociaciones con Café Negro, Comadreja y Pirita, debido a que estaban acusados de asesinato y otras acciones delictivas (*END*, 1992q)³².

Durante octubre y noviembre, tanto las acciones militares como el diálogo continuaron. Entre los acercamientos sobresalía el logrado con el FN 3-80 del Chacal, así como negociaciones con otros grupos aglutinados momentáneamente con ellos y cuyos jefes eran Northiel, Caturra, Bigote, Pinol, Sierrita y Guapote, entre otros. Los líderes del FN 3-80 y algunos de sus hombres se encontraban concentrados en una zona definida para ello en el municipio de Quilalí; sin embargo, abandonaron el lugar para internarse en la montaña con el argumento de que “no existen las condiciones adecuadas para su integración a la vida normal”. Para regresar a la mesa de negociación exigieron la investigación de la muerte de 200 excontras, el cumplimiento de acuerdos de desmovilización de 1990, la puesta en marcha del programa de gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) –la coalición política que llevó al poder a Violeta Barrios–, la destitución de Humberto Ortega y de Antonio Lacayo, cambios en las estructuras de la Policía Nacional, integración de los recontras en altos puestos en el Ministerio de Gobernación, entrega de tierra, lotes y viviendas y financiamiento bancario para la producción agrícola (*END*, 1992s). Nuevamente las condiciones y solicitudes eran amplias, ambiguas y, por lo tanto, difíciles de cumplir.

Para agravar más la situación, el jefe de la Policía de Quilalí, el excontra José Santos, alias Cascabel, y dos de sus hombres desertaron de la institución para sumarse a los rearmados de la zona. Lo habían decidido porque el Gobierno no había cumplido con sus compromisos, que consistían, según ellos, en: “la entrega de una camioneta, una casa y una finca”, es decir, bienes materiales que nunca fueron un compromiso de desmovilización. Es necesario saber que como parte de un arreglo político entre el Gobierno y los desmovilizados, Cascabel había sido nombrado jefe policial en La Trinidad, a pesar de su largo historial delictivo (entre sus crímenes destacan robo, secuestro y violación). Finalmente, debido a la presión de los pobladores y a las múltiples quejas recibidas, había sido trasladado a Quilallí, cuando desertó, además de las armas llevaba información valiosa de la Policía (*END*, 1992t).

32 El EPS “en marzo... logró la desmovilización de 3000 hombres... con el Plan Verano 92 e Invierno 92 se logró sacar de circulación –mediante la compra– 4000 armas de guerra” (*END*, 1992q).

Las acciones violentas continuaron. Waslala fue sitiada el 18 de diciembre por el Charro, Northiel y 200 hombres, lo que causó que los campesinos abandonaran sus hogares (END, 1992u). Al día siguiente, tropas helitransportadas llegaron a reforzar la zona, en entrevista el general Humberto Ortega reconoció la intensa actividad recontra y afirmó que está sería combatida y eliminada (END, 1992v). La Comisión Nicaragüense de Derechos Humanos reportó que la violencia fue la constante durante 1992 pues tan solo en el campo hubo 400 crímenes, documentó abusos del EPS durante el Plan Invierno 92, consideró además que comprar armas a los rearmados y a la sociedad fue un error del Gobierno pues se invirtió mucho dinero – más de cinco millones de dólares– (END, 1992w), y, como ya se mencionó, dichos recursos pudieron utilizarse de mejor forma, por ejemplo en programas sociales.

Durante 1993 los ataques del FN 3-80 continuaron; el ejército había atacado al grupo en varias ocasiones con saldo de 34 muertos. El 20 de enero de ese año, al sentirse acorralados, solicitaron reiniciar nuevas pláticas con el Gobierno. La carta-solicitud fue firmada por el Chacal, Martín, Venganza, Arnulfo, Esteban, Mágnum, Gato Negro y Rayo, entre otros, y fue entregada a las autoridades por medio de un funcionario de la CIAV-OEA (END, 1993b). La presidenta había manifestado su rechazo a los grupos en armas, en su ceguera política los consideraba como flojos y les reclamó: “tengan sensibilidad humana, dejen las armas, vayan a trabajar”, y si no lo hacían, les dijo, “el Ejército empleará todos los medios terrestres y aéreos para cumplir su misión” (END, 1993c). En este contexto de amenazas presidenciales, el Chacal y sus hombres se internaron en el enclave de El Zúngano para su desmovilización; sin embargo, dejaron organizados a 500 de sus miembros para realizar acciones de presión, posteriormente abandonaron el enclave sin entregar el arma. A la poca seriedad del FN 3-80 se sumó la negativa de Northiel, Guapote y el Charro de ingresar a la zona de enclave; después el Charro cambió de opinión e ingresó, pero reconsideró y se retiró, por lo que continuó con sus hombres movilizándose en las montañas matagalpinas y jinoteganas, a partir de ahí la separación entre el FN 3-80 del Chacal y el 3-80 de Northiel y el Charro fue consolidándose (END, 1993c).

La ruptura trajo más violencia; el 10 de febrero, el EPS envió un contingente al río Grande de Matagalpa para retomar Bocana de Paiwas, que estaba sitiada por varios grupos de recontras que habían cerrado las carreteras. Northiel y Guapote, por su parte, habían asaltado al transporte de la zona; por otro lado, la BED hacía esfuerzos para negociar con Cara de Malo y Wachara para que se mantuvieran en los enclaves de San Andrés de Boboque, Cerro Zínica y El Algodón (END, 1993d). El resultado fue una serie de combates entre el EPS y los grupos en armas, a partir de ahí en los enfrentamientos subsiguientes con Northiel y el Charro, las autoridades no hicieron demasiadas distinciones y los empezaron a considerar como meros delincuentes sin ninguna bandera política (END, 1993e).

En Matiguás, la situación fue particularmente violenta. Aparecieron campesinos degollados y las fuerzas de Northiel y las del Charro que actuaban en la zona fueron acusadas de realizar una campaña de terror (END, 1992i). Las imputaciones eran más que fundadas. El 9 de marzo de 1993, el Charro y veinte de sus hombres asesinaron a dos miembros de la BED y a un oficial del EPS, que se encontraban en la zona en busca de un grupo en armas que había manifestado su intención de negociar su desmovilización (END, 1993g). En mayo de 1993, un grupo armado destruyó los equipos de la red del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), lo que provocó graves pérdidas económicas y la caída del sistema de microondas que afectó no solo a Nicaragua sino también a Centroamérica (END, 1993j). En junio, como una medida de presión, para lograr la amnistía, el grupo del Charro paralizó la ruta Matagalpa, Cerro Colorado y Amatillo (END, 1993i). El 13 de julio otro grupo escindido del FN 3-80 realizó una emboscada a una camioneta que trasladaba cien mil córdobas de Somoto a San Juan del Río Coco, el dinero era propiedad del Banco Nacional de Desarrollo (BANDES). A pocos metros circulaba un vehículo del EPS que intentó detener el asalto, el saldo fue de tres soldados muertos y siete heridos, el grupo era comandado por Gorrión y Coyote (LP, 1993e).

Por su parte, la estrategia del FN 3-80 del Chacal fue dual; continuó con los ataques a las cooperativas agrícolas, a campesinos, a las vías de comunicación y a instituciones del Gobierno, al mismo tiempo que tenía acercamientos con la BED. El 25 de junio de 1993, el FN 3-80 envuelto entregó al Gobierno una agenda de 12 puntos “no negociables” y que consideraban como imprescindibles para iniciar las negociaciones que llevarían a la desmovilización del grupo. El documento fue socializado dentro de una reunión de alcaldes de Las Segovias con la delegación de la CIAV-OEA, donde además participaron miembros de las iglesias católica y evangélica y de la Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua.

Las demandas del FN 3-80 eran principalmente políticas: 1) dismantelar el EPS en un periodo no mayor de 12 meses; 2) reestructurar la Policía Nacional, ahí el Gobierno estaría obligado a formar un nuevo cuerpo integrado por exmiembros de la RN e incluso de la ex Guardia Nacional; 3) reformar la constitución política 4) Reordenar el poder judicial; 5) restablecer el orden en el poder legislativo; y, 6) solucionar los problemas de la sociedad nicaragüense en el exilio. La mayoría de estas demandas políticas eran, una vez más, casi imposibles de cumplir. Sus reivindicaciones como desmovilizados eran las siguientes: 1) solución inmediata al problema de la propiedad; 2) traslado del presupuesto que malgasta el Ejército hacia la producción, educación y salud; 3) asistencia técnica y financiera al campesinado; y, 4) implementación de proyectos sociales y comunales para crear fuentes de empleo a los lisiados de guerra (END, 1993k). Es importante observar que, en el pliego petitorio entregado, las reivindicaciones

políticas estuvieron por encima de las relativas al gremio de excombatientes, una tónica que ya se había establecido en el FN 3-80 desde 1992.

Evidentemente, los 12 puntos de la agenda no fueron cumplidos, a pesar de ser imprescindibles y no negociables para el Chacal. A principios de agosto de 1993, el FN 3-80 inició nuevamente negociaciones con la BED, ahí firmaron un documento de compromiso de tregua, sin embargo, los grupos de Northiel y el Charro mantuvieron su posición de no entregar las armas ni negociar (LP, 1993h). El Chumpe, otro líder recontra del FN 3-80, anunció su decisión de continuar de manera individual el rearme en Quilalí, lo siguieron 15 hombres (LP, 1993i).

A pesar del compromiso acordado y firmado, el FN 3-80 del Chacal realizó una acción armada espectacular, pues el 18 de agosto secuestró a la comisión negociadora del Gobierno integrada por diputados, y a los integrantes de la BED³³ que pactarían con el grupo su desmovilización. El secuestro se realizó en la comarca de Caulatú (también conocida con El Zúngano), ubicada a pocos kilómetros del poblado de Quilalí, lugar asignado previamente como zona de seguridad para la desmovilización del grupo en armas³⁴ (LP, 1993j). Este evento puso en la mira de las autoridades y de la sociedad en general el grave tema de la violencia del rearme, en palabras del líder del FN 3-10:

El general Humberto Ortega nos había mandado unas invitaciones de que quería negociar con nosotros directamente... yo nunca iba a aceptar a las Brigadas de Desarme como fuerza mediadora, yo nunca los consideré mis enemigos, pero tampoco iba a ser tan ingenuo de tomarlos en cuenta... entonces la BED era controlada por el Ejército, como le voy a confiar mi vida a mi propio enemigo, no era correcto, nos dijeron que el Ejército quería hablar con nosotros, pero nuestras fuentes también nos dijeron que lo que querían era aniquilarnos... Dijimos, si nos quieren eliminar mejor los vamos a retener aquí para obligar al Gobierno... lo que nosotros queremos es desmovilizarnos, que se creen las condiciones y no andar ni como forajidos ni nada, sencillamente fue como una retención la que hubo, porque la gente quedó hasta encantada, porque ninguno salió ni maltratado ni nada..., lo que queríamos era desmovilizarnos y que el mundo entero se diera cuenta de la situación que estábamos viviendo nosotros los desmovi-

- 33 Entre los secuestrados estaban Doris Tijerino, una reconocida excombatiente sandinista desde los tiempos de la lucha contra Somoza; los diputados Carlos Gallo y Aníbal Martínez, además de los principales jefes de la BED, el teniente coronel Ramón Ernesto Soza, el mayor Iván Portocarrero, y 20 integrantes de la BED, cuatro representantes del MAGFOR, MAS, INRA y del Ministerio de Comunicaciones y Transportes (MCT), un total de 43 personas (LP, 1993j) y no "ciento y pico de hombres" como recuerda el Chacal.
- 34 Para el Chacal fue una forma de presión pues los acuerdos que el Gobierno firmaba con los grupos en armas no eran planes de inserción para los excombatientes, solo buscaban la solución inmediata de sus necesidades: "Los grupos que negociaban con el Gobierno y pedían un solar, lo que le daban... eran 20 pliegos y no un terreno para hacer la casa, entonces para suplir sus necesidades en ese momento lo que hacía era vender el zinc, gastar el dinero y quedar otra vez así, o sea que en ese sentido hubo un plan muy desorganizado de parte del Gobierno para reinsertar a la gente en masa" (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 2006).

lizados de la Resistencia y el Gobierno que hiciera algún esfuerzo por solucionar el problema... Lamentablemente se retuvieron a las personas y no paso a mayor incidencia, eran ciento y pico de hombres de las Brigadas de Desarme... nosotros les quitamos más de 100 armas a ellos, hombres armados que andaban con los diputados (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 22 de noviembre, 2006; énfasis añadido).

Como era de esperarse, la acción recibió atención mediática de primer nivel. La respuesta recompa se dio al día siguiente, el 19 de agosto, el Comando Soberanía y Dignidad secuestró en las oficinas de la ciudad de Managua a varios integrantes del Consejo Político de la UNO. El comando solicitó al Chacal:

“la liberación inmediata y sin condiciones a los rehenes de El Zúngano”... la posición del comando, de orientación sandinista se endureció al saberse la negativa del Chacal de liberar a los rehenes... en Managua se encuentran secuestrados además de [Virgilio] Godoy, el expresidente de la Asamblea Nacional Alfredo César, Siete puñales, los diputados Myriam Argüello y Humberto Castilla (LP, 1993k).

El 24 de agosto, tras siete días de secuestro, los rehenes de Caulatú fueron liberados por el FN 3-80. Finalmente, el encierro de Managua concluyó el 25 de agosto cuando también fueron liberados los últimos rehenes que mantenía el comando. Se trató de las acciones más mediáticas realizadas hasta aquel momento; en ambos casos las reivindicaciones fueron principalmente políticas y solo tangencialmente de inserción para los excombatientes. Entre las demandas manifestadas por el FN 3-80 durante el secuestro estaban: ayuda para los desmovilizados de la RN y la destitución del jefe del Ejército, general Humberto Ortega, del ministro de la Presidencia Antonio Lacayo y del jefe de la Oficina de Información para la Defensa, coronel Lenín Cerna (Vargas, 1993, p. 4).

En un primer momento, varios miembros del Gobierno y de los medios de comunicación habían manifestado su abierta simpatía por el FN 3-80, al considerar su lucha como justa y reivindicativa. No obstante, dicha percepción fue rápidamente suplantada por una poco halagüeña:

FN 3-80: guerrilla familiar... El Zúngano... es más que un simple cerro. Es el condominio de un jefe militar que controla algo semejante a una pequeña república. Dentro del territorio nicaragüense, es un lugar autónomo que tiene su propia fuerza militar. La única autoridad en todo el lugar es esta guerrilla familia, que ha logrado la implantación de una casi nueva república en Quilalí, la de los Talavera Alaniz o la república del brazo armado Frente Norte 3-80 (LP, 1993m).

El gran derrotado de los secuestros fue el Chacal. Perdió, por lo menos mediáticamente, el apoyo de varios sectores de la población que vieron como una sinrazón los eventos recientes; además evidenció nuevamente

las inconsistencias en sus demandas, confirmó que su causa era principalmente política y no reivindicativa de los excombatientes. El grupo había mutado de la presión negociadora a la delincuencia y además era inestable pues no cumplía con los acuerdos firmados. Por si lo anterior no fuera lo suficientemente grave, el Chacal era incapaz de controlar a sus colegas que se volvían cada vez más violentos. Por su parte, el Comando Soberanía y Dignidad que realizó el contrasequestro de Managua, desapareció de la escena del rearme tan rápido como había ingresado.

Con la credibilidad maltrecha, el FN 3-80 ingresó a la zona de seguridad de El Zúngano. Había acordado junto con las autoridades una amnistía de 60 días, sin embargo, nuevamente un grupo salió del perímetro y siguió con la tónica del secuestro, pues participaron en otro, las víctimas fueron en este caso dos funcionarios franceses (*LP*, 1993o). Con el argumento de problemas de abastecimiento, otro grupo asaltó la sede de la BED en Ocotal. Como una medida preventiva, para evitar nuevas fugas, el EPS reforzó las vías de acceso a Quilalí, Santa Clara y Susucayán. El Gobierno consideró que con estas acciones el FN 3-80 había roto el acuerdo previo signado por el grupo, por lo que el general Ortega anunció el reinicio de operaciones militares (*LP*, 1993o). Para enrarecer más el clima, Northiel afirmó que la lucha continuaría hasta que se lograra la destitución de Humberto Ortega al mando del Ejército, asimismo amenazó a la presidenta con aumentar el número de hombres alzados en armas si no accedía a su petición (*LP*, 1993n). Como respuesta, durante octubre y noviembre, el Ejército reforzó las acciones militares contra el grupo en San Sebastián de Yali y persiguió de manera especial y diligente a Northiel, el Charro y Águila Negra, los líderes militares más violentos (*LP*, 1993x).

Los ataques y las negociaciones se realizaron de manera simultánea. Las BED mantenían los canales de comunicación abiertos en Quilalí donde esperaban que entre el 4 y 6 de octubre el 30 % de las fuerzas del Chacal se desmovilizaran; por su parte, otros grupos que habían sido aliados del FN 3-80 atacaron Río Blanco y Matiguás. El 9 de octubre, siete soldados del EPS y ocho rebeldes murieron cuando 60 hombres al mando de Musún realizaron una emboscada a un camión del EPS (*LP*, 1993q). El Gobierno endureció su postura al exigir la inmediata desmovilización del 60 % de las fuerzas del Chacal para el 10 de octubre y el 40 % restante el 25 de octubre. El FN 3-80 dijo desconfiar de las promesas del Gobierno y augurar que una vez desmovilizados no les cumplirán los acuerdos suscritos: “nuestra desconfianza tiene fuertes razones y una historia de múltiples traiciones” (*LP*, 1993r). El 8 de octubre, 80 hombres atacaron la población de Murra, los líderes fueron identificados como Vengador y el Chacal, y repelidos por miembros del EPS en un enfrentamiento armado (*LP*, 1993p). El 10 de octubre las negociaciones se rompieron por lo que el FN 3-80 abandonó el enclave en El Zúngano (*LP*, 1993s).

La autonombraada Comisión Negociadora del Norte³⁵ intentó mediar; la propuesta fue rechazada por el FN 3-80 del Chacal, que empezó a tomar posiciones preparándose para un ataque. Por su parte, el EPS no respondió, pero alistó a 600 hombres en la zona conocida como Las Segovias (LP, 1993t). Finalmente, el 15 de octubre el EPS inició:

una lucha sin cuartel en contra de los miembros del Frente Norte 3-80 y los grupos de delincuentes que operan en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí... las zonas de seguridad han desaparecido ante la intransigencia del FN 3-80 para negociar... significa que a partir de ahora ya no vamos a tolerar grupos armados de ninguna naturaleza en ningún sector del territorio (LP, 1993u).

Ante la posición beligerante del EPS, la respuesta del Estado Mayor del Frente Norte 3-80 fue la solicitud para reanudar las negociaciones por medio de un comunicado firmado por los comandantes Musún, Charrito, Chacalín, Pájaro y Águila. Allí pidieron a la presidenta Violeta Barrios repliegue toda las tropas que operaban en las regiones I y VI para continuar las pláticas; sin embargo, su posición siguió siendo altanera, pues afirmaron que si el repliegue militar no se daba antes del 30 de octubre, continuarían con acciones militares (LP, 1993v). El Gobierno y el EPS no se intimidaron, los combates siguieron y, aunque no fueron constantes, tuvieron una gran intensidad, como los registrados el 15 y 16 de noviembre ante los grupos de Gringo y Carlota, ambos del FN 3-80; el saldo fue de 5 militares muertos, 16 heridos, y 9 recontras muertos (LP, 1993w).

Tras los enfrentamientos y el fuerte cerco militar, José Ángel Talavera, el Chacal, se refugió en Honduras. Posteriormente reapareció con el envío de una carta dirigida a la presidenta Violeta Barrios, en la que aseguró estar acompañado de nicaragüenses que buscaban la paz, pidió además apoyo para una cooperativa de transporte de desmovilizados y facilidades para que los excombatientes pudieran realizar su trabajo (LP, 1993y). Esta posición conciliatoria contrastó con las acciones previas donde el grupo parecía “envalentonado”, este cambio tal vez se debió al juicio que el Chacal tenía pendiente con la justicia por el secuestro de Quilalí³⁶.

Durante noviembre y diciembre de 1993, el FN 3-80 mantuvo combates con el EPS, en ellos murieron varios rearmados; también intentó dinamitar en Estelí una torre del Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE), quemó además una finca de café y luego, en un comunicado del Estado Mayor del FN 3-80, amenazó con entorpecer la salida de la cosecha de café (LP, 1993aa). El Gobierno decretó una amnistía, pero no fue aceptada por el grupo, según su líder José Ángel Talavera:

35 En la búsqueda hemerográfica y archivística, no se encontró más información sobre la Comisión del Norte, sus integrantes o funciones, solo la información disponible en la nota periodística mencionada (LP, 1993t).

36 En el juicio en contra del Chacal estuvo citado el cardenal para brindar declaraciones ante las autoridades judiciales que procesaban por el secuestro de Caulatú (LP, 1993z).

Inteligentemente la bancada del Frente Sandinista introdujo una ley que buscaba una amnistía para todos los grupos armados que habían en Nicaragua... ¿qué hice yo? le di personalmente a don Sergio Caramagna de la OEA, con copia a los Derechos Humanos y al Gobierno de Nicaragua, un documento... Como líder del Frente Norte 3-80 me opongo rotundamente a una amnistía porque yo no me considero un delincuente... Si alguien tiene una queja contra mí, que me denuncie formalmente y que sea juzgado, yo no me acogí a esa amnistía, aquí estoy y nadie me acusó, porque yo no me considero ningún delincuente, ni hice un solo acto delictivo, ni mandé a un hombre mío a que le robara algo a alguien, ni un reloj, ni un anillo, ni siquiera eso, ni que fuera a secuestrar a alguien... Reuní a toda la tropa y les dije, si alguien ha cometido un delito tiene que ser sometido ante la justicia porque nosotros no andamos como delincuentes aquí, es un grupo político que busca reivindicaciones y así lo hicimos y quedó claro y demostrado, ahí están las pruebas donde el cardenal Obando, donde la CIAV-OEA... porque yo no me amnistí porque me consideraba un hombre limpio que nunca tomé un arma ni usé la ventaja que tenía para intimidar a alguien ni asesinarlo, ... La amnistía la dieron pero yo no me acogí (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 22 de noviembre, 2006).

Llama la atención que el líder del FN 3-80 mencione que él nunca mandó a secuestrar a nadie cuando su participación en los secuestros de Quilalí fue fundamental y está más que documentada. A lo largo de la entrevista realizada –como parte de una investigación más amplia–, se refirió al hecho con el eufemismo de “retención”³⁷. Durante 1994, las acciones del FN 3-80 dieron un giro pues iniciaron los ataques vandálicos contra objetivos socioeconómicos a través de lo que llamaron Plan Fósforo; siguiendo estas directrices atacaron una hacienda en Matagalpa; asimismo, un grupo al mando de Gorrión, el Pajarillo, Conejo y Byron asesinó a dos militantes sandinistas. Se trató de un grupo surgido de otra escisión del FN 3-80, pues, como ya se mencionó, las diferencias entre Northiel, el Charro y el Chacal eran cada vez más evidentes (END, 1994a). Una situación similar se daba al interior de los grupos, pues eran cada vez más palpables las diferencias entre las bases y sus líderes.

En enero de 1994, otros dos miembros del FN 3-80 desertaron de la agrupación e iniciaron ataques en Bocana de Paiwas (END, 1994b). Durante los primeros 20 días del mes, se dieron siete ataques perpetrados por exmiembros del FN 3-80, el saldo fue de 21 muertos; en total, se calcularon 150 hombres armados en la zona, los jefes eran Vengador, Mágnum, Martín Negro, Franklin, Flecha, Carlos 19, Otoniel y Coyote. Casi de manera simultánea a los ataques, se entregó a las autoridades el jefe recontra conocido con el alias de Grifo, quien informó que desde octubre de 1993

37 Los problemas con la justicia continuaron para José Ángel Talavera, pues fue enviado a prisión en 2013 acusado, junto con el militar retirado Sergio Alexander Román, del secuestro de Rudolf Marcus Malcher, un australiano que supuestamente debía 32,500 dólares al exlegislador del Parlamento Centroamericano, causa del plagio. Con base en dictámenes médicos, tanto Talavera como Román fueron liberados pues la ley establece que, al requerir atención médica especializada, no podían permanecer en prisión (García, 2013).

hubo problemas de comunicación entre el Estado Mayor del FN 3-80 y esa fue una de las causas de las escisiones (*END*, 1994c).

Los ataques del EPS al grupo del Chacal continuaron, el 1 de febrero murieron 16 de sus miembros (*END*, 1994d), el día siguiente cinco más (*END*, 1994e), en total perdió a 24 de sus hombres en ocho días de actividades. Fue tal la violencia que incluso la misión de la CIAV-OEA tuvo que suspender parte de sus actividades por miedo a ataques. Asimismo, se confirmó que Esteban, hermano del líder del FN 3-80 había sido herido en combate (*END*, 1994f). El 9 de febrero, el EPS decretó el cese al fuego únicamente en la zona de actividad del FN 3-80, la razón fue principalmente monetaria y había sido analizada desde agosto de 1993; para las autoridades: “media hora de vuelo en helicóptero cuesta 1000 dólares y 15 días de combate, medio millón” (BI, 1993b). Además, para el Gobierno era necesario entablar negociaciones con el FN 3-80 pues lo consideraba el último con características políticas, por ello se preparó un paquete social como oferta para su desmovilización (Cuadra, L. y Pérez, I., 1998, pp.118-119). Previamente, el teniente coronel Ricardo Wheelock, jefe de Relaciones Públicas del EPS, había confirmado que los recontras del FN 3-80 tenían en su poder 6 o 12 misiles tierra-aire FIM 43-A, que operaban en pequeños grupos y que en el campo donde se movían sufrían de una pobreza extrema, por lo que la solución con los Chacales debía ser integral (*END*, 1993b).

Mapa 2. Área de actividades armadas del FN 3-80 y grupos escindidos (1990-1997)



Fuente: Elaboración propia utilizando QGIS 2.8

4.2. La desmovilización del FN 3-80

Las autoridades militares tenían su propia visión sobre las características del FN 3-80 así como sobre su solución, y estas se diferenciaban de las que tenía el Gobierno. Este, por ejemplo, dio una nueva amnistía en febrero de 1994, en contraste con la de octubre de 1993, en la que el “Cese al fuego unilateral” incluyó negociaciones con los grupos en armas. La nueva amnistía carecía por completo de ello, el ministro de Gobernación afirmó: “de ninguna manera vamos a negociar con los irregulares... negociaciones una vez que se desarmen” (END, 1994g). Sin embargo, por su cuenta el EPS llevó su propia agenda pues el general Humberto Ortega

había enviado una carta a José Ángel Talavera en la que daba garantías al grupo: “jamás estaremos de acuerdo en que una vez desarmados se les desatienda y se les lance al abandono como realmente ha sucedido, tanto con los exmiembros del ejército y de la ex Resistencia Nicaragüense” (END, 1994j). La situación del FN 3-80 era sumamente complicada, había desgaste entre sus miembros, bajas y escisiones constantes, por ello el Chacal vio la necesidad de desarmarse, según sus palabras:

Lógicamente nosotros tomamos en cuenta que era necesaria una desmovilización, no había otro camino, si queríamos actuar responsablemente ¿qué es lo que podía desencadenar esto? Sencillo, que nuestra gente se convirtiera en vándalos, en delincuentes y que comenzaran a secuestrar gente, a robarle a uno o a otro, pero eso no era nuestro propósito, nuestro propósito era responsable, era buscar reivindicaciones para nuestra gente, viendo la realidad en que estaba el país, nuestro campesinado que eran nuestros mejores aliados, no podíamos ser el puñal de ellos nosotros mismos, e ir a quitarle su vaca que a lo mejor era lo único que tenía, ni modo de matar la gallina que le ponía el huevo para sus hijos. Entonces consideramos, como líderes responsables, que era la única salida, negociar y hacer eso que hicimos que fue la salida más inteligente y responsable, no había otro, no había cómo (José Ángel Talavera, el Chacal, comunicación personal, 22 de noviembre, 2006).

Por medio del mencionado intercambio epistolar, a mediados de febrero, el FN 3-80 decidió desmovilizarse ante la CIAV-OEA por medio de un protocolo de desarme encabezado por el Chacal y Esteban. En el Acuerdo de Caulatú (Quilalí, Nueva Segovia) firmado el 24 de febrero de 1994, el FN 3-80 aceptó su desarme incondicional, pero a pesar de ello obtuvo una serie de garantías importantes. En materia de seguridad logró, la desmilitarización de la zona de Quilalí, 100 miembros podrían ingresar a la Policía Nacional hasta conseguir el 50 % de su composición; además se les entregó la jefatura de la Policía en tres poblados (Wiwilí, Quilalí y El Jícaro), la segunda jefatura de la Policía en San José de Bocay, Pantasma, Yalí, San Rafael del Norte, La Concordia, Ciudad Antigua, Jinotega y Ocotal, asimismo obtuvieron algunos puestos en el Gobierno local (END, 1994k). Otros beneficios obtenidos fueron: el crédito bancario para adquirir tierras y asistencia técnica para trabajarla, atención médica y una remuneración económica consistente en mil córdobas a cada combatiente por fusil entregado (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.118-119). El acuerdo también incluyó la creación de un Comité Especial Interinstitucional, que tendría la función de ejecutar los acuerdos, y la instauración de un Comité de Paz y Desarrollo Integral.

Con la intermediación de la BED,³⁸ el 2 de marzo de 1994 inició el desarme del FN 3-80. Se hizo de manera escalonada, una sección de hombres lo realizó en marzo y el último contingente, compuesto por 350 excombatientes, se desarmó el 16 de abril de 1994. Dos situaciones llamaron la atención: 1) su líder José Ángel Talavera entregó, junto con su arma, un misil Sam 7 evidenciando su capacidad de fuego –los persistentes rumores afirmaban que aún conservaba otros misiles y armamento pesado–; 2) Salvador Talavera, Esteban, hermano del Chacal y vocero del grupo, recibió el cargo de asesor del titular del MINGOB (*LP*, 1994a), un puesto que sorprende al tratarse de un grupo evidentemente derrotado y con mala fama mediática. En el evento que supuestamente pondría fin a la guerra participó el cardenal Obando y Bravo, monseñor Eddy Montenegro, Sergio Caramagna –representante de la CIAV-OEA–, así como el ministro de Gobernación, Alfredo Mendieta, quien se comprometió a desarrollar un proyecto integral de reinserción a la sociedad, no solo para los desmovilizados, sino también a la población campesina del norte del país. El Gobierno daría asistencia técnica, crédito, y reconstruirá caminos y carreteras que garantizarían la producción de las 5000 manzanas de tierra que los desmovilizados del FN 3-80 pretendían trabajar en forma de cooperativas, agregó que: “varios países ya han destinado recursos importantes, destacando a los Estados Unidos cuyo Gobierno desembolsará 25 millones de dólares para la zona de Quilalí y la Comunidad Económica Europea con 800 mil dólares” (*LP*, 1994a).

Los nexos con ciertas figuras del Gobierno se hicieron presentes de nueva cuenta, pues fue significativo que, hasta ese momento, ningún otro grupo en armas había logrado tanto en los acuerdos firmados, y ningún otro recibiría tantos beneficios. Según las autoridades, ello se debió a que fueron considerados como un grupo con “banderas políticas”, pues manifestaron la necesidad económica y social de sus miembros; sin embargo, esa necesidad era una realidad expuesta también por otros grupos en armas que no obtuvieron ni remotamente lo concedido al FN 3-80. Su cercanía con el poder también fue evidenciada al recibir cartas del jefe del Ejército y mucha atención mediática. Además, para el Gobierno nicaragüense, el Acuerdo de Caulatú fue el último firmado dentro del proceso de desmovilización y desarme (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.118-119). El Gobierno recibió fuertes críticas por el acuerdo, principalmente en los medios de comunicación: a pesar de la probada participación de Omar y Lobo –entre otros miembros del FN 3-80– en el asesinato de unos 200 sandinistas,

38 La importancia que tuvo la BED en la desmovilización en Nicaragua no ha sido plenamente reconocida, gracias a su intermediación se logró la desmovilización del Frente Revolucionario Obrero Campesino (FROC), Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI), Fuerzas Armadas de Lucha Popular (FALP), Movimiento Armado de Defensa Obrero Campesino (MALDOC), entre otros. “En total [la] BED incautó durante sus tres años de labor 8165 armas, 166,733 artefactos explosivos, desmovilizó a 24,419 hombres de los cuales 14,378 eran recontras y 11,041 recompas de 131 grupos. ... participó en 100 micro proyectos con la cooperación Italiana, de los cuales solo un 50 % fueron efectivos y viables” (Arévalo Cuadra, 2007, p. 41).

así como de los abusos y crímenes cometidos, se concluyó con el proceso de desmovilización (*END*, 1993h), y “los chacales” obtuvieron beneficios inimaginables para otras agrupaciones.

Como ya se mencionó, uno de los elementos fundamentales del Acuerdo de Caulatú fue la oportunidad de que miembros del FN 3-80 ingresaran a la Policía Nacional para proteger la seguridad de sus compañeros³⁹; sin embargo, de los 68 aspirantes, 10 desertaron, otros 16 fueron dados de baja por mala conducta, 12 fueron detenidos por algunos delitos y solo 42 se integraron efectivamente (*LP*, 1994b). Entre los casos más significativos está el ya mencionado Cascabel⁴⁰ y Pajarito o Pajarillo -como aparece en algunos documentos-, ambos con acusaciones de robo, secuestro y violación. Estos desmovilizados, rearmados y nuevamente desmovilizados, involucrados en actos delictivos, demuestran dos situaciones problemáticas entre los excontras. Por un lado, la incapacidad de algunos excombatientes de dejar las armas como forma de vida; pero también evidencian la ausencia de políticas gubernamentales para apoyarlos en el difícil paso a la vida civil; no solo requerían dinero o insumos productivos, también era necesario hacerlos partícipes del proceso económico, social y político de transición a la vida civil, así como darles asesoría para lograr la resolución pacífica de los conflictos.

Los grupos escindidos del FN 3-80 encabezados por Northiel y Flecha no mostraron disposición al desarme pues consideraban que aún no habían logrado ningún beneficio con el rearme (*END*, 1994h). El 15 de febrero asesinaron a un productor (*END*, 1994i), incluso, horas después de la firma del Acuerdo de Caulatú, unos ochenta hombres al mando de Northiel y el Charro atacaron Mulukukú, murió un campesino, secuestraron a 12 personas, saquearon el puesto de salud y varios comercios (“Acuerdo de paz”, 1994). El 20 de noviembre quemaron vehículos en varias vías rurales, de esta manera, los jefes del 3-80: el Charro, Northiel, Musún y Pinares, entre otros, se distanciaron definitivamente de Talavera y continuaron su lucha (Cuadra, L., y Pérez, I., 1998, pp.118-119).

A partir de la desmovilización del FN 3-80, las autoridades consideraron que los 500 hombres en armas que quedaban carecían de banderas políti-

39 Por lo establecido en el Acuerdo de Caulatú, el comité departamental del FSLN en Jinotega expresó preocupación en lo relativo a que los miembros del FN 3-80 integraran la Policía Nacional. Calificó la medida como “represión institucional de nuevo cuño” y recordó que, desde el cambio de Gobierno, por lo menos 211 sandinistas habían sido asesinados por los recontras en el departamento de Jinotega (“Acuerdo de paz”, 1994).

40 Cascabel había logrado incorporarse a la Policía como parte de un acuerdo político, en 1992 era el jefe policial de Quilalí cuando desertó de la institución llevándose armas e información. Se sumó al grupo del Chacal y posteriormente se desmovilizó de nueva cuenta en abril de 1994 con el FN 3-80. En mayo de ese año, volvió a rearmarse y participó en la toma de instalaciones de TELCOR y la alcaldía de Quilalí (*LP*, 1994c). La policía los desalojó y el consejo de comandantes de la Policía informó de manera contundente que: “en adelante, los nicaragüenses que deseen ingresar a las filas de la Policía Nacional lo harán mediante los procedimientos fijados por las leyes, mismas que están por encima de cualquier acuerdo, incluido el presidencial” (*LP*, 1994d).

cas y serían considerados delincuentes comunes o bandas delincuenciales (END, 1994i). Entre ellos estaban Charrito y Carlos 19, exmiembros del FN 3-80 que, por divergencias, no habían participado en el desarme pues consideraban que el Chacal era un vendido y que el Gobierno no cumpliría⁴¹. Por su parte Northiel y el Charro siguieron en armas⁴², por un tiempo siguieron autonombrándose 3-80, finalmente, y para separarse por completo de los Chacales decidieron conformar el Movimiento Democrático de Salvación Nacional.

Como contraste a los excontras que persistían en el rearme, unos 800 exmiembros del FN 3-80 se organizaron en la Cooperativa CoNorte 3-80 en Quilalí para producir en colectivo, pues con los beneficios de su última desmovilización adquirieron fincas y créditos, así como financiamiento para proyectos productivos, como la siembra de frijol, café, granos básicos y hortalizas, además de un programa de viviendas financiado por la cooperación internacional y becas de estudios. Esta decisión de colectivizar la producción fue paradójica pues los contras lucharon durante la década de los ochenta en contra de la revolución sandinista bajo argumentos relativos al derecho a la propiedad privada y libre distribución de los productos, es decir, en contra de las políticas estatistas y colectivas de producción y distribución implementadas por el Gobierno sandinista; sin embargo, los recontras del FN 3-80 se unieron voluntariamente bajo formas cooperativas de producción después del rearme, aun cuando las tierras que poseían estaban legalmente bajo el régimen de propiedad individual.

La tranquilidad tardaría en llegar para los recontras del FN 3-80, pues un mes después de su desmovilización nuevamente participaron en la toma de la ciudad de Quilalí, las oficinas del TELCOR, BANDES y la alcaldía exigiendo: 1) el cumplimiento inmediato de los acuerdos, pues el Gobierno solo los había cumplido en un 70 %; y 2) y la integración a la Policía de algunos de sus miembros, a pesar de sus antecedentes delictivos (LP, 1994c). Una comisión encabezada por el Chacal y Chacalín viajó a Managua y se presentó en las oficinas del MINGOB y de la CIAV-OEA con sus demandas, mismas que al parecer tenían novedades, como dos vehículos, tractores y el nombramiento de los impresentables Cascabel y Pajarillo como delegados del MINGOB en San Rafael del Sur (END, 1994n). Estas acciones son prueba fehaciente de las limitaciones del FN 3-80 y su ende-

41 Las críticas al Chacal y su desmovilización llegaron por varios frentes. El 20 de abril, un grupo de excombatientes cerraron la entrada a Quilalí, exigiendo las tierras ofrecidas al FN 3-80 y que les correspondían a ellos. La respuesta de Estaban fue que eran viejos desmovilizados que querían provechar la situación. Por otro lado, había dudas sobre la entrega de todas las armas y de la existencia de misiles no declarados (END, 1993i).

42 En Somoto, Madriz, los jóvenes Natividad Romero, de 19 años, y Antonio Rugama, de 15 años, se entregaron voluntariamente al comando policial de San Juan de Río Coco. Eran parte de los grupos de Northiel y el Charro, depositaron dos fusiles aka y 600 proyectiles, posteriormente fueron remitidos a la CIAV-OEA y la BED (END, 1994m). La juventud y su inexperiencia en la montaña también hizo dudar a las autoridades sobre su participación en la guerra de la década pasada. Lo anterior es un elemento más de la relación meramente delincencial de los grupos del Charro y Northiel.

ble visión política como organización; a pesar de estar desmovilizados y de contar con importantes beneficios, continuaron con sus arcaicas formas de lucha, la presión militar y de manera simultánea la negociación, ello hace referencia también a una realidad significativa para el grupo, pero fácilmente extendida a otros: la evidente incapacidad de líderes y excombatientes de pensar de manera pacífica y el reiterado deseo de imponer sus intereses sobre cualquier forma de legalidad, esta persistencia causó el rechazo de parte de la sociedad nicaragüense que deseaba dejar las armas como forma de lucha política e iniciar el proceso de reconciliación. Por otro lado, estas acciones también demuestran la confianza del grupo en sus buenas relaciones con el Gobierno, que nuevamente cedería a sus presiones⁴³.

Un año después, en 1995 los problemas de propiedad de los exmiembros del FN 3-80 no habían acabado. El Gobierno adquirió tierras –propiedad de los hermanos Alex Ramón y Saúl Centeno Roque– que cedió a los 500 miembros de la Cooperativa CoNorte 3-80. Sin embargo, tanto el Gobierno como la gente del Chacal fueron “estafados por unos cuatro millones de córdobas pues les vendieron tierras –191 manzanas– que en realidad no existían”. Las propiedades eran la finca Guaná con 357.2 manzanas y Criket de Oro con 24, después de ser compradas y entregadas se hizo la distribución entre los desmovilizados, ahí se comprobó que los terrenos eran menores de los vendidos, tanto el Gobierno como los cooperativistas instalaron comisiones sin poder solucionar el problema (*END*, 1995s).

En 1997, tres años después de su desmovilización, cuando no representaban un peligro o presión para el Gobierno, pues se trataba de una cooperativa productiva y solo un número muy reducido de sus excolegas seguían en armas en actividades meramente criminales, el Gobierno de Arnoldo Alemán firmó un nuevo acuerdo con el FN 3-80. En ese convenio les otorgó nuevamente amplios beneficios pero, sobre todo, les condonó todas sus deudas crediticias. Estos beneficios extemporáneos llamaron la atención, pues el grupo ya no ejercía presión política o armada; no obstante, fue nuevamente beneficiado. Los rumores sobre el trasfondo de dichos apoyos es que fueron el pago por sus años de servicio a Arnoldo Alemán y el papel destabilizador que ejercieron durante el Gobierno de Violeta Barrios⁴⁴.

43 Dicha situación también hace referencia a la incapacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos suscritos o la poca seriedad con la que se firmaban.

44 “El 11 de noviembre de 1997 se creó el Destacamento de Pacificación y Desarme, un colón de la BED que tenía como misión principal la pacificación y desarme del Frente Norte 3-80” –que estaba desmovilizado desde marzo de 1994– ... y las negociaciones para su posterior desmovilización del Frente Unido Andrés Castro y del Frente Nacional Ramón Raudales” (Arévalo Cuadra, 2007, p. 55). Para el comandante Rubén: “en el tiempo de doña Violeta adquiere el FN 3-80 un compromiso de negociaciones de unas fincas y créditos y una cooperativa, cuando llega Arnoldo Alemán entonces le condona la deuda que andaba alrededor de 34 millones de córdobas, la deuda que tenían los Chacales con el estado, Alemán los condona porque él fue el que los creó, su regalo” (Óscar Sovalbarro, alias Comandante Rubén, comunicación personal, 2 de noviembre, 2006).

Tanto los acuerdos para el FN 3-80 de 1994 como los de 1997 fueron un gran contraste con los logrados previa y posteriormente por otros grupos que también pusieron en vilo al Gobierno y que tenían más necesidad. Tal es el caso de los recompas del Frente Revolucionario Obrero Campesino (FROC) y de las Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI) que fueron perseguidos por las autoridades. Con los años el FN 3-80 siguió siendo un actor importante de la posguerra pues fue el único grupo recontra con presencia en la Comisión de Reconciliación de 2006, asimismo sus líderes fueron protagonistas: José Ángel Talavera, el Chacal, como diputado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y su hermano Salvador Talavera, Esteban, como presidente del Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN) y posteriormente como aliado del FSLN en las elecciones de 2006, que llevaron de nuevo a Daniel Ortega a la presidencia del país después de haberla perdido en 1990 ante Violeta Barrios.

5. Otros grupos en armas y los remanentes del 3-80

Varios grupos recontras participaron en acciones sumamente violentas⁴⁵, que iban desde asaltos a transportistas y quema de vehículos, hasta secuestros. Pajarillo y Cascabel participaron en el asesinato selectivo de líderes de origen sandinista. Un ejemplo de esos excesos fue la masacre de San Ramón, donde mataron a cuatro personas, todas exmilitares y militantes del FSLN: el conflicto inició por una propiedad, la finca La Carlota de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), que pretendían usufructuar los excontras, a pesar de estar en manos de campesinos y trabajadores sandinistas. Al lugar llegaron seis hombres de un remanente del FN 3-80, asesinaron a quienes defendían la finca; uno de ellos era un recompa que se había rearmado con el Movimiento de Autodefensa en Armas (MADNA) para protegerse de los ataques de la Recontra (END, 1994s).

Los remanentes del 3-80 más activos fueron los comandados por Northiel y el Charro. En mayo de 1994, ambos participaron junto con 40 de sus hombres en la violación de dos jóvenes en Wilikito, Río Blanco. Las mujeres fueron degolladas después del abuso y la casa que habitaban, destruida con granadas de fragmentación; su muerte se sumó a otros cuatro asesinatos de campesinos en la comunidad (END, 1994o). El 21 de junio, varios transportistas que se movían entre San Rafael del Norte y Wiwilí, y entre Ocotol y Nueva Segovia fueron agredidos, y dos de sus vehículos quemados; posteriormente, los jefes recontras Northiel, el Charro, Pajarillo, Cascabel, Musún, Palo Negro y Zapayol hicieron público un comunicado

45 Otro ejemplo de las barbaridades de algunos grupos sucedió en Estelí cuando un grupo recontra emboscó y quemó a dos personas, además hizo explotar con dinamita el vientre de una mujer campesina. Uno de los muertos era un servidor público con antecedentes militares y de filiación sandinista, el teniente primero Arnesio Romero, jefe regional de transporte del MINGOB en Estelí (END, 1993a).

donde amenazaron con destruir y quemar los vehículos que circularan por la zona (END, 1994p). Otros grupos que participaban en estas actividades eran los comandados por Toñón, el Tático, el Venado y Águila Negra.

Los remanentes del FN 3-80 fueron beneficiarios de actos de corrupción gubernamental; su cercanía y simpatía con funcionarios del Gobierno lo hizo obtener ventajas, por ejemplo recibían medicamentos del Ministerio de Salud (MINSa) que, en lugar de ser entregados a los centros de salud de Matagalpa y Matiguás, eran cedidos a el Charro, Northiel y el Tigre (END, 1994r), quienes las vendían. Por otro lado, la misma familia Talavera fue blanco de la delincuencia pues, al ser prominentes cafeticultores, algunos miembros fueron secuestrados (END, 1994y).

El Ejército atacó a los remanentes de FN 3-80, así cayó en combate en septiembre de 1994, Alonso Olivas Méndez, el Chumpe, que se había desmovilizado en Caulatú pero “se realzó en las montañas de Nueva Segovia y se convirtió en delincuente común con su célula de 15 hombres” (END, 1994t). Similar suerte corrieron Gorrión y Pajarillo (END, 1994v), y posteriormente otros 24 recontras, entre ellos: Pinares, el Mico, Gamuza, Noel Castillo, Nemesio Reyes y Manzanares. Finalmente el mismo Northiel murió en enero de 1995 en un ataque contra el EPS (END, 1995a). Como consecuencia las autoridades informaron que “la delincuencia había disminuido en un 60 % en el último trimestre del año... las operaciones militares... han logrado abatir a peligrosos jefes”; a pesar de las acciones, todavía unos 150 armados sobrevivían enmontañados durante ese año (END, 1995a).

Para las autoridades y habitantes de la zona montañosa de Jinotega y Matagalpa, Pablo García Castro, Northiel, de 40 años de edad, jefe del estado mayor del Movimiento Democrático de Salvación Nacional –un remanente del FN 3-80– era el autor de 73 asesinatos, entre ellos el del vicealcalde de Wiwilí y del secretario político del FSLN, de seis indígenas misquitos en San Andrés de Bocay (END, 1994w), de excontras que no quisieron sumarse a sus filas e incluso victimario de miembros del mismo grupo por celos de mando, entre ellos Peligro, Invisible, Tábano y Hernán Negro (END, 1995a).

Con el descabezamiento del líder más importante de los recontras delincuenciales, muchos de sus seguidores buscaron a las autoridades para evitar su aniquilamiento. Ese fue el caso de José Fausto Castillo Picado, alias Richard, segundo al mando de las tropas de Northiel. Rearmado desde 1992 y presentado ante periodistas en una rueda de prensa, ahí afirmó que “desertó por estar hastiado de los crímenes contra campesinos”. Además:

involucró a connotados políticos, diputados, comerciantes y a un periodista de La Prensa como principales colaboradores del movimiento armado Frente Norte 3-80... el presidente del Partido Conservador Adolfo Calero Portocarrero, los diputados Humberto Castilla y Enrique Siles... la cooperativa de transporte CONTRAMUSUN que suministraba vestuario y calzado a las tropas... Alberto Rivera Monzón, de La Prensa suministraba información sobre los movimientos del EPS... el exjefe de la Resistencia "Dimas Tigrillo" colaboró con 10 mil córdobas (END, 1995b).

Richard afirmó que "el objetivo principal del FN 3-80 era mantener las actividades bélicas de cara a las elecciones de 1996, donde políticos de la Resistencia, del PLC, y Conservador pretenden llegar al poder a través de la coacción armada contra el campesinado" (END, 1995b). La declaración servía al Gobierno porque daba elementos para dudar de la verdadera razón del rearme de los excontras del 3-80; no se trataba, según el testimonio de Richard, de reivindicación de los excombatientes ante el incumplimiento de los acuerdos de desmovilización o la inseguridad de la zona, sino que había un objetivo político, sacar del poder a Violeta Barrios e instalar en la presidencia a políticos arribistas. Servía también al Ejército, que entonces 1) podía actuar con mayor libertad contra los grupos armados pues eran simples delincuentes; 2) le daba nueva credibilidad al encontrarse en un proceso de transición, ya que había cambiado la máxima autoridad en la institución, el general Joaquín Cuadra relevó a Humberto Ortega; 3) protegía a la institución de su reciente actuar en la masacre de La Marañosá, donde atacó a los Meza, un grupo que estaba por desmovilizarse⁴⁶, y fue acusada de abuso de fuerza; y 4) justificaba su actuación por la caída de Northiel, pues este era un desestabilizador del Gobierno, un delincuente por lo que su muerte no debía ser investigada a profundidad. Con las declaraciones de Richard, mediáticamente la bandera económica y social de los rearmados caía para ser suplantada por la delincencial, así el Ejército informó: "los últimos rearmados o se entregan o correrán la misma suerte (que Northiel) porque en el país los grupos armados ya no tienen cabida, el hecho de empuñar las armas por un resentimiento o por cualquier argumento" (END, 1995c).

Richard también provocó el enojo de varios de sus antiguos aliados. Tras la muerte de Northiel, el mando del grupo recayó en Ciriaco Palacios, el Charro, y como lugarteniente se estableció Solín, ambos buscaron venganza, por ello acudieron con algunos de sus hombres a San Juan de Bocay y asesinaron brutalmente a sus ancianos padres y a un hermano. No se

46 La masacre de la Marañosá es quizá la acción armada más vergonzosa para el Ejército. Se pudo comprobar, por medio de la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la Asamblea Nacional, que la información dada por el Ejército no coincidía con los hechos. Este había informado que en La Marañosá se defendió y que no hubo ninguna masacre pues la banda de los Meza estaba armada, prueba de ello era que había heridos de la Agrupación Táctica de Combate (ATC). En los hechos, los Meza habían negociado su desmovilización y se dirigían a entregar el arma el 6 de enero de 1995 cuando fueron atacados por el Ejército; ahí murieron los 13 rebeldes (END, 1995h).

le perdonó que entregara el arma ni que haya “delatado” al grupo (END, 1995d). A la masacre y posterior incendio sobrevivió una hermana de 22 años y dos de sus hijos, quienes lograron huir hacia la montaña (END, 1995e). La venganza llegó el 23 de marzo de 1995 cuando asesinan a la familia de Solín. Existen varias versiones de los hechos, la primera afirma que el crimen lo cometió Mano de Fierro como parte de un ajuste de cuentas pues durante la guerra Solín asesinó a su hermano. Otra versión es que Solín y Mano de Fierro, como miembros del Frente Democrático de Salvación Nacional, remanente del FN 3-80, sostuvieron un combate por error entre ellos, donde el último fue quien llevó la peor parte, razón por la que se vengó. La tercera es la mencionada líneas arriba, que el asesinato fue represalia por el asesinato de la familia de Richard (END, 1995g).

La desmoralización por la muerte de Northiel o el convencimiento de que la causa estaba definitivamente deteriorada propició un nuevo proceso de desmovilización. El 21 de abril de 1995 varios recontras entregaron el arma, entre ellos: Adolfo Hernández Martínez, alias Chaparro, de 24 años y jefe del grupo Arges Sequeira; Jaguar, Veloz y Moreno. A cambio de su arma, el Gobierno entregó un salvoconducto para restituirles sus derechos ciudadanos, a pesar de tratarse de un desarme incondicional, los 10 hombres tenían la esperanza de recibir “tierra y propiedades para poder trabajar” (END, 1995i). Otro remanente del 3-80 se desmovilizó en junio de 1995, entre ellos estaba el líder Antonio Cavaría Palacios, alias Arnulfo, Trueno, Calígula, Relámpago, Coralillo, Gallo, Pantera, Pepito, Zorro y Mapa. Previamente lo habían hecho Noelito, Lester y Ubence. Según las autoridades “el estado de ánimo de quienes entregaron incondicionalmente las armas era de total desmoralización... los fusiles entregados están comidos por el sarro, no tenían medios de comunicación y sus uniformes andaban en harapos de tanto pernoctar en el monte” (END, 1995j). Como contraparte continuaron en armas el Charro, Lobo, Estrella, Veneno, Pajarillo, Joel y Culebra (END, 1995j). Para octubre de 1995 las autoridades consideraban que quedaban unos 400 hombres armados, de 1055 que operaban en 1994 (END, 1995n).

El Charro se especializó en el plagio como actividad predominante, en febrero de 1995 secuestró al ciudadano norteamericano Gary Alan Hicks y a otras cinco personas, entre ellas cuatro indígenas (END, 1995f). En septiembre, junto con Lobo, raptó a cinco funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) que trabajaban en Wiwilí; a cambio de su libertad exigieron que el ejército saliera de Bocas de Wamblán y Plan de Grama y se presentaran a esa comunidad comisiones de derechos humanos y de la CIAV-OEA (END, 1995k). Otra forma de mantener alejado al Ejército de sus zonas de influencia fue la amenaza a los pobladores. En Río Blanco, por ejemplo, estaba planeada la construcción de un camino a la comarca de Wanawás, la obra se realizaría con fondos de la Comunidad Económica Europea y personal del Programa de Desarrollo de Río Blanco (PRODERBO), pero el

Charro amenazó a los pobladores de que si llegaban las máquinas, llegaba el Ejército y ellos estarían entre dos fuegos. Los 7500 campesinos solicitaron la suspensión del proyecto (END, 1995o).

Poco a poco la información sobre el Charro y sus hombres se vuelve más escasa. En noviembre de 1995, con información proporcionada por el obispo de Matagalpa, se sabe que ni los ataques de las fuerzas armadas ni los intentos por desmovilizarlos los están haciendo desaparecer, sino el cólera y el dengue que ya había matado a cinco de sus hombres, por lo que solicitaron a la autoridad eclesial la atención médica necesaria (END, 1995p). Un año después, en 1996, un subordinado del Charro apodado Gigante, junto con 20 de sus seguidores, fueron acusados de asesinar a una familia campesina en Matagalpa. Las víctimas fueron degolladas, incluidos dos niños, asimismo se informó que Ciriaco Palacios, el Charro, continuaba con sus actividades en Waslala, desde donde al parecer estableció una zona de tránsito para el narcotráfico (END, 1996). Finalmente el último acuerdo de desmovilización se firmó en febrero de 1999 entre el Gobierno e indígenas agrupados en YATAMA, un total de 1500 hombres entregaron el arma y materiales bélicos, aunque no trascendió a los medios de comunicación cuáles fueron los beneficios entregados por el Gobierno.

6. Conclusiones

En Nicaragua los dividendos de la paz fueron muy pocos y sumamente selectivos, así los desmovilizados durante la paz se encontraron en peores condiciones que durante la guerra. El Gobierno demostró ineficiencias en su gestión pues no previno el largo proceso de inserción que requeriría una generación de hombres y mujeres protagonistas de la guerra. En sus cálculos parecen ausentes, por un lado, el aspecto psicológico o subjetivo del tránsito de la vida subsidiada en la milicia a la civil y productiva, y, por el otro, la base económica mínima necesaria para iniciar la inserción. Esa fue la realidad a la que se enfrentaron quienes dejaron el arma; no tuvieron las herramientas para integrarse. Tras una década de lucha muy poco habían logrado, y de poderosos hombres en la milicia de los ochenta pasaron a los pobres de siempre en la década de los noventa.

La posguerra en Nicaragua fue una década de desdibujamiento y reconfiguración, las instituciones se transformaron, los límites de la lucha social y política de excombatientes y líderes políticos también fueron difusos, las justas reivindicaciones y la delincuencia se tocaban con demasiada frecuencia, y las ideologías entre los excombatientes pobres se habían borrado para unirse en las batallas de la supervivencia. La posguerra no significó paz, por el contrario, se caracterizó por una serie de luchas de índole social, económica, política y delincencial. A los errores chamorristas debe sumarse un sector de excombatientes que no querían dejar la vida de la guerra; así, ante la ausencia de políticas integrales y de largo plazo

para su inserción, se abrieron las puertas a una nueva lucha, en la que unos participaron por reivindicaciones, otros, por coraje o bien por el puro deseo de seguir enmontañados.

La gran mayoría de las reivindicaciones de los grupos armados eran justas, pero la gran cantidad de agrupaciones, la poca claridad en sus demandas y las rupturas internas dentro de la excontra dieron lugar a muchas confusiones y, sobre todo, al aumento de la violencia. El norte de Nicaragua fue una nueva zona de guerra por la gran cantidad de acciones entre 1991 y 1995. A los asesinatos de campesinos y cooperativistas, se sumaron los ataques de los grupos rearmados al EPS y viceversa, así como los actos delincuenciales de algunos de los grupos en armas, e incluso los graves casos de ajuste de cuentas entre los mismos recontras. Entre los asesinatos a campesinos, el caso más significativo es quizá el de Waslala, se trató de una familia de seis miembros que fue acribillada mientras dormía (*LP*, 1993a). Los campesinos habían dado alimento a un grupo de recompas que también deambulaba por la zona y el asesinato perpetrado por un grupo recontra era la represalia por el apoyo. Los campesinos se encontraban entre dos fuerzas armadas, por ello muchos cooperativistas y excombatientes también se armaron⁴⁷, para garantizar su seguridad.

A pesar de que las autoridades señalaron la desmovilización del FN 3-80 como el símbolo del fin del rearme, la realidad siguió siendo violenta principalmente en el norte del país. Con el desarme de los Chacales también se demostraron las fisuras internas de los excontras; por un lado, los que habían decidido negociar y resultaron beneficiarios de algunos de los acuerdos, por otro, los excontras que no habían recibido ningún tipo de beneficio y deseaban obtenerlo por medio del rearme y, por último, los que no estaban dispuestos a dejar las armas independientemente de los beneficios. Un ejemplo de la ruptura y estas tres tipologías, tiene lugar entre el 29 y 30 de junio de 1994 con tres eventos:

a) En Managua, un grupo de excombatientes, en evidente estado de pobreza por la calidad de sus ropas y armamentos, tomó la sede diplomática de Colombia y de la CIAV-OEA pidiendo seguridad y trabajo (*END*, 1994q). Eran los excontras que no habían sido beneficiados.

b) En un restaurante en la capital, otro grupo de seis exlíderes contras, todos exmiembros del Consejo de Comandantes⁴⁸ se presentó en una rueda

47 En esta coyuntura de violencia, el 20 de febrero de 1993 surge el Frente Punitivo de Izquierda (FPI), cuya misión fue castigar las acciones violentas de los recontras, entre ellas el secuestro, asesinato y ataques a comunidades campesinas de origen sandinista. El método de FPI fue tanto el cierre de carreteras como el asesinato selectivo de algunos de los líderes de la derecha y excontras, sobresale el de Arges Sequeira, líder de los confiscados.

48 Los otros comandantes que participaron en la rueda de prensa eran: Rodolfo Ampié, alias el Invisible, "señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como uno de los autores de centenares de crímenes y desapariciones de hondureños y nicaragüenses"; Edgard Molinares,

de prensa, vestidos con ropa elegante, joyas y transportados en costosas camionetas. Allí desconocieron los reclamos y demandas de los excontras que tomaron las sedes y, en general, a todos los rearmados con el siguiente argumento: “aunque las demandas puedan ser justas no se debe atacar al Gobierno... las tomas son efectuadas por personas que usan el nombre de la Resistencia para sus fines personales y que dañan el nombre de la organización” (*END*, 1994q). Estos eran los excontras que se rearmaron que “atacaron al Gobierno con sus justas demandas” y posteriormente negociaron con las autoridades, fueron beneficiarios y ya eran parte del Gobierno, por lo que desconocían a sus bases. Destaca significativamente el caso de Salvador Talavera, uno de los líderes del FN 3-80 que, como previamente se señaló, tras su desmovilización fue nombrado asesor del ministro de Gobernación Alfredo Mendieta (*END*, 1994q).

c) En Ocotal, 50 exmiembros del FN 3-80 volvieron a tomar las armas y se alzaron con el grupo de Pajarillo y Cascabel (*END*, 1994q). Estos fueron algunos excontras que se negaban a dejar las armas como forma de vida, independientemente de las reivindicaciones o los beneficios negociados y entregados.

El FN 3-80 es significativo para el estudio de la posguerra, pues tuvo entre sus filas a tres tipos de excombatientes de la extinta contra: en primer lugar, a los que participaron en el movimiento recontra por su signo reivindicativo, se trató de desmovilizados que buscaron presionar para lograr el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y la obtención de una base económica para iniciar la vida civil; también participaron los que ingresaron al grupo por intenciones políticas, en algunos casos en reclamo de una cuota de poder e incluso como apéndice de los intereses y aspiraciones políticas del vicepresidente Virgilio Godoy, de Arnoldo Alemán o algún otro político arribista; y, finalmente, los que fueron incapaces de integrarse a la vida civil, fueron los meros delincuentes enfocados en asaltos y ajustes de cuentas. Para el Ejército y el Gobierno era difícil diferenciar a los tres tipos de excombatientes del FN 3-80 pues muchas de sus actividades rayaban en la ilegalidad por decir lo menos. Sin embargo, en su desagravio hay que recordar que eran hijos de la guerra, con pocas habilidades productivas, resabios de guerra para las autoridades que no consideraron lo complicado y costoso que sería el paso de la vida militar a la civil. El rearme de excombatientes, en este caso de la excontra, demostró que la posguerra fue una continuación de la guerra de la década anterior, la diferencia es que en la primera se luchó ideológicamente, mientras que la segunda fue una lucha por la sobrevivencia de los excombatientes.

alias comandante Richard; Jorge Ávalos, comandante Ávalos; Luis Ángel López, alias Leonel, y Ervin Barbarena, conocido como Óscar el Ñajo.

Durante la posguerra, Nicaragua aprendió una dura lección. La paz no se consigue firmando acuerdos de desmovilización ni reduciendo las fuerzas armadas, tampoco comprando armas, dando dinero o combatiendo a los alzados. Por el contrario, la paz se logra con la implementación de políticas productivas de largo plazo, con apoyo psicológico y social a las víctimas de guerra y de violencia, con la incorporación activa de los protagonistas de la guerra en el proceso de pacificación e inserción. Después de entregar el arma, los excombatientes rápidamente identificaron sus necesidades primordiales y cómo satisfacerlas, por ello una de las consignas más significativas durante el rearme fue “La reinserción no es dinero, es trabajo”, algo que el Gobierno de Violeta Barrios no pudo lograr.

Siglas y acrónimos

ATC	Asociación de Trabajadores del Campo
ATC	Agrupación Táctica de Combate
ATIMCO	Atlantic Timber Corporation
BANDES	Banco de Desarrollo
BED	Brigada Especial de Desarme
CIAV-OEA	Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos
CENPAP	Centro Nacional de Planificación y Administración de los Polos de Desarrollo
CSE	Consejo Supremo Electoral
END	El Nuevo Diario
EPS	Ejército Popular Sandinista
FALP	Fuerzas Armadas de Lucha Popular
FDN	Fuerza Democrática Nicaragüense
FDSN	Frente Democrático de Salvación Nacional
FN 3-80	Frente Norte 3-80
FPI	Fuerzas Punitivas de Izquierda / Frente Punitivo de Izquierda
FROC	Frente Revolucionario Obrero Campesino
FSLN	Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUAC	Frente Unido Andrés Castro
INCEP	Instituto Centroamericano de Estudios Políticos
INE	Instituto Nicaragüense de Electricidad
INEC	Instituto Nicaragüense de Estadística y Censos
INRA	Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria
LP	La Prensa
MADNA	Movimiento de Autodefensa en Armas
MAGFOR	Ministerio de Agricultura y Forestal
MALDOC	Movimiento Armado de Defensa Obrero Campesina
MAS	Ministerio de Acción Social
MCT	Ministerio de Comunicaciones y Transportes
MINGOB	Ministerio de Gobernación

MINSA	Ministerio de Salud
MINT	Ministerio de Interior
OIJ	Organismo de Investigación Judicial
ONU	Organización de Naciones Unidas
PRN	Partido de la Resistencia Nicaragüense
PRODERBO	Programa de Desarrollo de Río Blanco
RAAN	Región Autónoma del Atlántico Norte
RN	Resistencia Nicaragüense
SMP	Servicio Militar Patriótico
TELCOR	Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
UNO	Unión Nacional Opositora
YATAMA	Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Hijos de la Madre Tierra)

Bibliografía

1. Acuerdo de paz con el Frente Norte. (1994). Revista Envío, 146. Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/2429>
2. Arévalo Cuadra, R. (2007). ¡Alto al fuego! La experiencia de la Brigada Especial de Desarme (BED). Universidad Politécnica de Nicaragua.
3. Beumeister, E. (1996). Reforma agraria y organizaciones de pequeños y medianos productores en Nicaragua. En *Estructuras agrarias y movimientos campesinos en América Latina (1950-1990)* (pp. 235-294). España: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
4. Bardini, R. (1988). Narcos y Contras, alianza para la corrupción. *Latinoamérica, Hora Cero*, 7, 26-30.
5. BI (1993a, marzo). Verificar función de la CIAV. *Barricada Internacional*.
6. BI (1993b, agosto). Otro capítulo de guerra. Rearmados se toman Estelí. *Barricada Internacional*.
7. CENPAP. (1992). *Aportes para la estrategia del desarrollo agropecuario*. (Centro Nacional para la Administración de los Polos de Desarrollo, Ed.). Managua.
8. Chomsky, N. (2003). Piratas y emperadores. Terrorismo internacional en el mundo de hoy. Barcelona: Ediciones B.
9. Cuadra L. E., Pérez, B. A., Saldo-mando, A. (1998). Orden social y gobernabilidad en Nicaragua 1990-1996 (CRIES.). Managua.
10. DiFilms. (1992). Últimos rebeldes guerrilleros entregan armas. Recuperado de <http://www.youtube.com/watch?v=kUo-0cEI-k0>
11. Ejército. (1998). Memoria del Ejército de Nicaragua. Managua.
12. END. (1990a, abril 7). Contras arrasan bosques en Honduras. *El Nuevo Diario*, p. 7.
13. END. (1990b, julio 7). Gobierno entrega extensos bosques. *El Nuevo Diario*, p. 14.
14. END. (1990c, julio 14). Fagoth vendiendo la madera a Estados Unidos. *El Nuevo Diario*, p. 1.
15. END. (1990d, julio 26). Ex contras en trasiego de cocaína a EU. *El Nuevo Diario*, p. 1.
16. END. (1990e, agosto 30). Ex contras siembran el terror. Roban ganado y amenazan a campesinos en Rancho Grande y Waslala. *El Nuevo Diario*, p. 7.
17. END. (1990f, septiembre 2). ¡ONU: Hambre en Nicaragua! *El Nuevo Diario*, p. 1.
18. END. (1990g, septiembre 6). Abrams pretende robarnos madera. *El Nuevo Diario*, pp. 1-8.
19. END. (1990h, octubre 18). END. EEUU olvida a Centroamérica. *El Nuevo Diario*, p. 5.
20. END. (1991a, enero 6). Cae banda de abigeatos. *El Nuevo Diario*, p. 3.
21. END. (1991b, enero 22). Descubren buzón contra. *El Nuevo Diario*, p. 6.
22. END. (1991c, febrero 17). Matan a Bermúdez. *El Nuevo Diario*, p. 1.

23. END. (1991d, abril 16). Sangre en el Norte. *El Nuevo Diario*, p. 1.
24. END. (1991e, mayo 1). Contra quiso matar a la presidenta. *El Nuevo Diario*, p. 1.
25. END. (1991f, mayo 5). Brigada 3-80 entró en Honduras. *El Nuevo Diario*, p. 1.
26. END. (1991g, mayo 23). Recontras metidos al robo de ganado. *El Nuevo Diario*, p. 7.
27. END. (1991h, junio 7). Terror Re-contra aparece en la RAAN. *El Nuevo Diario*, p. 1.
28. END. (1991i, junio 30). Recontras saquean banco en Pantasma. *El Nuevo Diario*, p. 8.
29. END. (1991j, julio 26). Recontra ataca Quilalí, p. 1-2.
30. END. (1991k, agosto 7). Exigente Indominable. *El Nuevo Diario*, p. 10.
31. END. (1991l, agosto 13). Mataron a mujer de Indominable. *El Nuevo Diario*, p. 2.
32. END. (1991m, septiembre 12). Recontras asaltando y matado. *El Nuevo Diario*, p. 6.
33. END. (1991n, octubre 19). Recontra le roban 150 mil a BANDES. *El Nuevo Diario*, p. 2.
34. END. (1991o, octubre 22). Recompas se toman ENABAS San Isidro. *El Nuevo Diario*, p. 2.
35. END. (1991p, noviembre 24). EPS: orden de capturar al Indomable vivo o muerto. *El Nuevo Diario*, p. 1.
36. END. (1992a, enero 9). Recontras roban el BND de Bocay. *El Nuevo Diario*, p. 8.
37. END. (1992b, febrero 11). Domado el indomable. Entrega fierros y se va a Miami. *El Nuevo Diario*, p. 1.
38. END. (1992c, marzo 17). Comercio con armas. *El Nuevo Diario*.
39. END. (1992d, mayo 8). EPS despeja vías. *El Nuevo Diario*, p. 1.
40. END. (1992e, mayo 21). 300 armados en región VI. *El Nuevo Diario*, p. 6.
41. END. (1992f, mayo 27). EPS balance militar del primer semestre de 1992. *El Nuevo Diario*, pp. C-4.
42. END. (1992g, junio 30). Medicinas y alimentos roban ex contras. *El Nuevo Diario*, p. 2.
43. END. (1992h, julio 25). Matan al Indomable en frontera hondureña. *El Nuevo Diario*, p. 1.
44. END. (1992i, agosto 13). Enfrentamiento en Las Segovias. *El Nuevo Diario*, p. 1.
45. END. (1992j, septiembre 1). 3-80 recontras en ataque a El Cacao. *El Nuevo Diario*, p. 1.
46. END. (1992k, septiembre 9). Terror recontra. 7 cadáveres en región I. *El Nuevo Diario*, p. 2.
47. END. (1992l, septiembre 10). Matan a Peligro y 4 más. *El Nuevo Diario*, p. 1.
48. END. (1992m, septiembre 12). Inician Plan 15 de septiembre con ataques a El Júcaro y Condega. *El Nuevo Diario*, p. 1.

49. *END.* (1992n, septiembre 19). Ataque a Teotecacinite y EPS choca con recontras. *El Nuevo Diario*, p. 1.
50. *END.* (1992o, septiembre 20). Combate en La Concordia. Grupo 3-80 huye en desbandada. *El Nuevo Diario*, p. 1.
51. *END.* (1992p, septiembre 25). Proclaman guerra total. Entrevista exclusiva con jefe de estado mayor del 380. *El Nuevo Diario*, p. 3a sección.
52. *END.* (1992q, Octubre 16). EPS ha desarticulado 53 bandas delictivas. *El Nuevo Diario*, p. 2.
53. *END.* (1992r, noviembre 9). Bigote de Oro se recupera para hacerle frente a la justicia. *El Nuevo Diario*, p. 1.
54. *END.* (1992s, noviembre 27). 200 recontras rechazan diálogo y se enmontañan. *El Nuevo Diario*, p. 2.
55. *END.* (1992t, diciembre 14). Nueva amenaza recontra. *El Nuevo Diario*, p. 11.
56. *END.* (1992u, diciembre 18). Waslala sitiada. Recontras controlan 15 kilómetros de carretera. *El Nuevo Diario*, p. 1.
57. *END.* (1992v, diciembre 19). EPS combate en Bocay. Persiste asedio recontra a Waslala. *El Nuevo Diario*, p. 1.
58. *END.* (1992w, diciembre 30). Violencia fue norma en 1992. *El Nuevo Diario*, p. 1. Managua.
59. *END.* (1993a, enero 3). Recontras emboscan y queman a 2 personas. *El Nuevo Diario*, p. 1.
60. *END.* (1993b, enero 21). Recontras solicitan pláticas. Han tenido 34 muertos. *El Nuevo Diario*, p. 1.
61. *END.* (1993c, enero 29). Máxima alerta en el norte. EPS listo para una compleja operación. *El Nuevo Diario*, p. 1.
62. *END.* (1993d, febrero 10). Recontras se toman carreteras del Norte. *El Nuevo Diario*, p. 1.
63. *END.* (1993e, febrero 20). Matagalpa amenazada. *El Nuevo Diario*, p. 1.
64. *END.* (1993f, marzo 8). 8 recontras abatidos. *El Nuevo Diario*, p. 1.
65. *END.* (1993g, marzo 10). Asesinan a teniente y a dos BED en Matiguás. *El Nuevo Diario*, p. 1.
66. *END.* (1993h, abril 10). 3-80 ha asesinado a 219 sandinistas. *El Nuevo Diario*, p. 1.
67. *END.* (1993i, abril 21). Protestan recontras a la entrada de Quilalí. *El Nuevo Diario*, p. 7.
68. *END.* (1993j, mayo 29). Delincuentes 3.80 destruyen los equipos de TELCOR. *El Nuevo Diario*, p. 1.
69. *END.* (1993k, junio 26). Rearmados de la zona norte y central condicionan desarme. *El Nuevo Diario*, p. 13.
70. *END.* (1993l, junio 27). Recontras toman 6 poblados. *El Nuevo Diario*, p. 2.
71. *END.* (1994a, enero 6). Con dos crímenes Recontras abren Plan Fósforo. *El Nuevo Diario*, p. 1.
72. *END.* (1994b, enero 21). Bocana de Paiwas en pie de guerra. *El Nuevo Diario*, p. 6.

73. END. (1994c, enero 22). 7 combates contra remanentes del 3-80. *El Nuevo Diario*, p. 8.
74. END. (1994d, febrero 1). EPS ataca a El Chacal. *El Nuevo Diario*, p. 1.
75. END. (1994e, febrero 2). Otras 5 bajas a recontras 3-80. *El Nuevo Diario*, p. 1.
76. END. (1994f, febrero 4). Combates impiden misión CIAV-OEA. *El Nuevo Diario*, p. 1.
77. END. (1994g, febrero 10). EPS decreta el cese del fuego. *El Nuevo Diario*, p. 1.
78. END. (1994h, febrero 12). Frente 3-80 decidido a desarmarse. *El Nuevo Diario*, p. 1.
79. END. (1994i, febrero 16). 3-80 asesina a productor. *El Nuevo Diario*, p. 7.
80. END. (1994j, febrero 17). Humberto da garantías al Frente 3-80. *El Nuevo Diario*, p. 2.
81. END. (1994k, febrero 25). Chacales se volverán policías. *El Nuevo Diario*, p. 8.
82. END. (1994l, marzo 3). Se desarma el 3-80. *El Nuevo Diario*, p. 1.
83. END. (1994m, marzo 19). Dos recontras de Northiel entregan armas cansados de trajinar sin futuro. *El Nuevo Diario*, p. 2.
84. END. (1994n, mayo 20). Chacales en enésima ocupación de Quilalí. *El Nuevo Diario*, p. 8.
85. END. (1994o, mayo 31). 6 campesinos asesinados. *El Nuevo Diario*, p. 1.
86. END. (1994p, junio 22). Sigue terror en el norte. *El Nuevo Diario*, p. 1.
87. END. (1994q, junio 30). Ex contras renuentes a desalojar las sedes. *El Nuevo Diario*, p. 2.
88. END. (1994r, julio 22). MINSA sigue dando medicinas al 3-80. *El Nuevo Diario*, p. 1.
89. END. (1994s, agosto 23). Masacre en San Ramón. *El Nuevo Diario*, p. 1.
90. END. (1994t, septiembre 18). Aniquilan a El Chumpe. *El Nuevo Diario*, p. 2. M
91. END. (1994u, septiembre 30). 66% de nicas en desempleo. *El Nuevo Diario*, p. 12.
92. END. (1994v, octubre 25). 8 muertos en combates en el norte. *El Nuevo Diario*, p. 8.
93. END. (1994w, noviembre 11). Masacran a miskitos. *El Nuevo Diario*, p. 1.
94. END. (1994x, noviembre 12). Miskitos combaten a banda de criminales. *El Nuevo Diario*, p. 1.
95. END. (1994y, noviembre 13). Rescate de película. *El Nuevo Diario*, p. 1.
96. END. (1994z, noviembre 15). ONU: Nicaragua empobrecida. *El Nuevo Diario*, p. 1.
97. END. (1995a, enero 5). Confirmada plenamente la muerte de Northiel. *El Nuevo Diario*, p. 1.
98. END. (1995b, enero 8). Acusan a políticos de apoyar guerra. Brazo derecho de Northiel se destapa. *El Nuevo Diario*, p. 2.

99. END. (1995c, enero 12). Cambios militares en febrero. *El Nuevo Diario*, p. 2.
100. END. (1995d, febrero 5). Masacran familia de ex cabecilla. *El Nuevo Diario*, p. 1.
101. END. (1995e, febrero 7). Sobrevivientes narran masacre. *El Nuevo Diario*, p. 1.
102. END. (1995f, febrero 11). Charrito [sic] secuestra a un norteamericano. *El Nuevo Diario*, p. 1.
103. END. (1995g, marzo 24). Recontras masacran a la familia de Solín. *El Nuevo Diario*, p. 8.
104. END. (1995h, abril 4). Informe del Ejército no coincide con los hechos. *El Nuevo Diario*, p. 1.
105. END. (1995i, abril 21). Se desalzan 10 recontras. *El Nuevo Diario*, p. 7.
106. END. (1995j, junio 12). Se desmovilizan 10 en Jinotega. *El Nuevo Diario*, p. 14.
107. END. (1995k, septiembre 12). Armados secuestran a 5 funcionarios del CSE. *El Nuevo Diario*, p. 1.
108. END. (1995l, septiembre 24). Ejército asegurará cosechas de café. *El Nuevo Diario*, p. 8. Jinotega.
109. END. (1995m, septiembre 27). Frontera norte, tienda de armas. Ex contras hacen su agosto con pertrechos embuzonados. *El Nuevo Diario*, p. 12.
110. END. (1995n, octubre 2). ¿Montañas del norte usadas por narcos? *El Nuevo Diario*, p. 1.
111. END. (1995o, octubre 10). Amenazas de El Charro impiden vital carretera. *El Nuevo Diario*, p. 2.
112. END. (1995p, noviembre 1). Peste diezma a la banda de El Charro. *El Nuevo Diario*, p. 11.
113. END. (1995q, diciembre 12). Contrabando de armamento. *El Nuevo Diario*, p. 1.
114. END. (1995r, diciembre 20). 1995: año militar muy agitado. *El Nuevo Diario*, p. 8.
115. END. (1995s, diciembre 28). Estafan a El Chacal. *El Nuevo Diario*, p. 8.
116. END. (1996, febrero 10). Masacre a familias campesinas. *El Nuevo Diario*, p. 1.
117. García, S. (2013, julio 29). Dictamen médico excarcela a ex diputado Talavera. *El Nuevo Diario*. Managua.
118. Hobsbawn, E. (1974). *Bandidos*. Barcelona: Ariel.
119. INCEP. (1994). El proceso de paz y democratización en Centroamérica: documentos y cronología 1989-1991. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).
120. Los recontras: campesinos armados con amplia base social. (1991). *Revista Envío*, 119. Recuperado de <http://www.envio.org.ni/articulo/684>
121. LP. (1993a, febrero 16). Atroz matanza de recontras. *La Prensa*, p. 1.

122. LP (1993b, marzo 19). Informe del EPS 46 muertos en 27 combates. *La Prensa*, p. 2.
123. LP (1993c, julio 3). Estados Unidos habla de rearmados. Nota de prensa de la embajada con declaración de Joseph Zinder. *La Prensa*.
124. LP (1993d, julio 7). Godoy en reunión con El Chacal. *La Prensa*.
125. LP (1993e, julio 14). 3 soldados muertos y 7 heridos en emboscada en Estelí. *La Prensa*, p. 1.
126. LP (1993f, julio 15). Anticastroistas ayudan a reconstras. *La Prensa*, p. 2.
127. LP (1993g, julio 24). Tomas Borge solidario con asaltantes. *La Prensa*.
128. LP (1993h, agosto 4). “Chacal” acuerda tregua. *La Prensa*, p. 1.
129. LP (1993i, agosto 9). “El Chumpe” y “Cinta Negra” sin ubicarse. *La Prensa*, p. 8.
130. LP (1993j, agosto 19). Secuestran a Diputados. *La Prensa*.
131. LP (1993k, agosto 20). UNO, FSLN y Gobierno exigen liberar rehenes. *La Prensa*, pp. 1, 12.
132. LP (1993l, agosto 26). Fin a pesadilla. Rehene de la UNO aclamados como héroes. *La Prensa*.
133. LP (1993m, agosto 29). FN 3-80 Guerrilla familiar. *La Prensa*, p. 1,8.
134. LP (1993n, septiembre 11). La lucha seguirá hasta que se vaya H. Ortega. *La Prensa*, p. 1.
135. LP (1993o, octubre 6). Chacal cierra paso a Quilalí. *La Prensa*, pp. 1, 16.
136. LP (1993p, octubre 8). Rechazan ataque contra Murra. *La Prensa*, p. 1.
137. LP (1993q, octubre 9). 15 mueren en emboscada. *La Prensa*, p. 1.
138. LP (1993r, octubre 9). Difícil negociación del Gobierno. *La Prensa*, p. 2.
139. LP (1993s, octubre 11). Suenan tambores de guerra en el norte. *La Prensa*, p. 1.
140. LP (1993t, octubre 16). Tensión en el Norte. *La Prensa*, p. 12.
141. LP (1993u, octubre 17). EPS ordena atacar El Zúngano. *La Prensa*, p. 1.
142. LP (1993v, octubre 29). FN 3-80 pide continuar pláticas. *La Prensa*, p. 10.
143. LP (1993w, noviembre 17). 5 militares heridos en lucha. *La Prensa*, p. 2.
144. LP (1993x, noviembre 22). EPS tras Northiel y Águila Negra. *La Prensa*, p. 8.
145. LP (1993y, noviembre 22). Reaparece EL Chacal. *La Prensa*, p. 16.
146. LP (1993z, noviembre 29). El Cardenal citado en juicio al Chacal. *La Prensa*, p. 1.
147. LP (1993aa, noviembre 29). EPS y FN 3-80 combaten. *La Prensa*, p. 5.

148. LP (1994a, abril 16). Último contingente de 3-80 se desarma. *La Prensa*.
149. LP (1994b, abril 30). Entrenan a 3-80. 42 nuevos agentes del orden. *La Prensa*.
150. LP (1994c, mayo 15). Rearmados ocupan Quilalí. *La Prensa*.
151. LP (1994d, mayo 18). No Casaca-beles ni más pajarillos. *La Prensa*.
152. LP (2001, agosto 29). Una guerra de 1,850 muertos en 10 años. *La Prensa* Recuperado de <http://www.laprensa.com.ni/2001/08/29/nacionales/775107-una-guerra-de-1850-muertos-en-10-aos>
153. Rocha, J. L. (2001, julio). Breve, necesaria, tormentosa historia del FUAC. *Revista Envío*. Recuperado de www.envio.org.ni/articulo/1089
154. Rueda Estrada, V. (2007). Los rearmados de Nicaragua. Los últimos bandoleros sociales. Cinteotl. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2. Recuperado de http://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/revista/revista_num2_07/veronica_rearmados_nicaragua.htm
155. Rueda Estrada, V. (2014). El Ejército de Nicaragua ante el rearme de excombatientes 1990-1997. Ponencia presentada en el XII Congreso Centroamericano de Historia. San Salvador. Recuperado de http://www.academia.edu/8152828/El_ej%C3%A9rcito_de_Nicaragua_ante_el_rearme_de_ex_combatientes_1990-1997
156. Saldomando, Á. (s/f). Los problemas de la pacificación en Nicaragua. Recomposición de grupos armados y conflictos sociales (Mimeografiado). Managua.
157. Santana, A. (2004). *El narcotráfico en América Latina*. México: Siglo XXI.
158. Vilas, C. M. (1993). *Democracias emergentes en Centroamérica* (p. 420). México: CEICH-UNAM.
159. Vilas, C. M. (1994). Mercado, estados y revoluciones. Centroamérica 1950-1990. México D.F.: UNAM, Ed.
160. Vargas, O. R. (1996). Los secuestrados de Quilalí y Managua. En *Revista Amanecer*. Julio-Septiembre. Managua: Centro Ecuménico Antonio Valdivieso.

